

**MINISTERIO PÚBLICO**

**C/ JEFFREY IGNACIO LLANILLOS PLAZA**

**RUC N°1601189897-5**

**RIT N°497-2024**

**DELITO: ROBOS CON VIOLENCIA E INTIMIDACION**

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos, oídos los intervinientes y considerando:

**Primero: Tribunal e intervinientes.** Que, los días quince, dieciséis y diecinueve de mayo del presente año, ante los jueces doña Pamela Quiroga Lorca, quien presidió la audiencia, doña Maite Ramírez Castillo y doña Alejandra Pía Rodríguez Oro, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en esta causa **Rit N°497-2024**, seguida en contra de **JEFFREY IGNACIO LLANILLOS PLAZA**, chileno, cédula nacional de identidad N°**17.622.236-0**, casado, sin apodo, de oficio chofer, nacido el día 21 de abril de 1990, 35 años, domiciliado en calle Llanquihue N°11, ciudad de Puerto Montt, representado por las abogadas de la Defensoría Penal Pública doña Irka Contreras Castillo y doña Valentina Aravena Valdebenito, ambas con domicilio y forma de notificación ya registrada en el tribunal.

Fue parte acusadora en este juicio, el Ministerio Público, representado por el Fiscal Adjunto don Fernando Donoso Rosello, con domicilio y forma de notificación ya registrada en el Tribunal.

**Segundo: Acusación.** Que, el ente persecutor fundó la acusación formulada en contra del imputado, según se leyó del auto de apertura de juicio oral, en el siguiente hecho:

“Hecho 1: El día 4 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima Carolina Andrea Guzmán San Martín, se encontraba en la intersección de calle Francisco Cerda con Río Colorado, comuna de Recoleta, fue abordada por el imputado Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza junto a otro sujeto no identificado, procediendo ambos a intimidar a la víctima con un cuchillo, mientras le tiraban la cartera hasta que se cortaran los tirantes de ésta. Posteriormente, el imputado Llanillos Plaza, junto al otro sujeto desconocido, huyeron en el vehículo con las especies sustraídas en su poder.

Hecho 2: El día 13 de diciembre de 2016, a las 10:00 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima Sara Elvira Zamora Rivera, se encontraba en la intersección de calle Raúl Montt con Nueva Recoleta, comuna de Recoleta, fue abordada por Camila Ignacia González Fuentealba y Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza, quienes descendieron de un vehículo, procediendo González Fuentealba a tirar la cartera que llevaba la víctima, quien opuso resistencia, por lo que González Fuentealba golpeó a la víctima contra un poste, cayendo ésta al suelo y arrastrándola hasta que logró cortar los tirantes de la cartera, resultando la víctima con lesiones. Posteriormente, ambos imputados huyeron en el vehículo con las especies en su poder. Cabe señalar que, mientras González Fuentealba intimidaba a la víctima, el imputado Llanillos Plaza prestó labores de cobertura en todo momento.

Hecho 3: El día 13 de diciembre de 2016, a las 16:00 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima Valentina Antonia Guerrero Zúñiga se encontraba en la intersección de calle Bismuto con Dora, comuna de Recoleta, fue abordada por Camila Ignacia González Fuentealba y Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza, quienes descendieron de un vehículo, procediendo González Fuentealba a intimidar a la víctima con un cuchillo a la altura del estómago señalándole: "ya conchetumadre", mientras que, con la otra mano, tiraba el bolso que llevaba la víctima, hasta que logró cortar los tirantes y llevarse el bolso, que contenía el celular de la víctima, y documentos personales, valuados en \$330.000.-. Posteriormente, ambos imputados huyeron en el vehículo con las especies en su poder. Cabe señalar que

mientras la imputada González Fuentealba intimidaba a la víctima, el imputado Llanillos Plaza prestó labores de cobertura en todo momento.

Hecho 4: El día 13 de diciembre de 2016, a las 19:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima Daniela Valeska Martínez Acuña, se encontraba en la intersección de calle Raúl Montt con Avenida Recoleta, comuna de Recoleta, fue abordada Camila Ignacia González Fuentealba y Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza, quienes descendieron de un vehículo, procediendo González Fuentealba a tirarle el bolso que traía la víctima, mientras comenzó a golpearla. A raíz de que la víctima no soltaba el bolso, el acusado Llanillos Plaza, tomó a la víctima por el pelo y le señaló: "quédate tranquila, loca", procediendo a ponerle un paño en la nariz a la víctima, cayendo al suelo y subiéndola al automóvil en el que se trasladaban, para posteriormente arrojar a la mujer del vehículo. Posteriormente, el acusado, junto con González Fuentealba huyeron en el vehículo con las especies en su poder.

Hecho 5: El día 13 de diciembre de 2016, a las 21:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima Fernanda Del Carmen Alonso Millavil, se encontraba caminando por calle Dorsal, comuna de Recoleta, fue abordada por el imputado Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza, quien descendió de un vehículo y le manifestó: "esta huea la vamos a hacer súper corta", por lo que la víctima salió corriendo, momento en cual es alcanzada por el imputado, quien la empujó y la botó al suelo, tomando el bolso que traía la víctima en su hombro, comenzando a arrastrarla por el suelo, hasta quitarle el bolso, resultando la víctima con lesiones leves. Posteriormente, el sujeto se subió al vehículo y huyó del lugar con la especie en su poder."

Sostuvo el Ministerio Público que hechos descritos son constitutivos de cinco (5) delitos reiterados de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 1° del Código penal, en relación con el artículo 432 del mismo cuerpo legal, encontrándose los delitos en grado de desarrollo consumado, correspondiendo al acusado responsabilidad a título de autor de los delitos reiterados de robo con intimidación, de conformidad a lo previsto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, toda vez que ejecutó los hechos en forma inmediata y directa. Agregó que respecto del acusado no concurrían circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Por lo anterior, solicitó se condenara al acusado a la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, conforme al artículo 28 del Código Penal y costas de la causa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Además, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley N°19.970 sobre Sistema Nacional de Registros de ADN solicitó determinar la huella genética del condenado, previa toma de muestras biológicas, y ordenar la incorporación de dicha huella genética al Registro de Condenados.

**Tercero: Alegatos de Apertura.** El Ministerio Público, precisó que la prueba hablaría por sí sola. Declararían las cinco víctimas sobre los hechos y la participación del acusado. Detalló que los hechos acusados constituían delitos reiterados de robo con intimidación, cometidos por el imputado Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza, principalmente el 13 de diciembre de 2016 y uno en fecha anterior. Indicó que todas las víctimas eran mujeres que transitaban solas por la vía pública y fueron abordadas por el imputado, en ocasiones junto a otros sujetos, mediante el uso de violencia o intimidación. Señaló que la prueba a rendir consistiría principalmente en los testimonios de las víctimas y funcionarios policiales, quienes acreditarían la participación del imputado en los hechos, así como su identificación. Resaltó que, en la mayoría de los casos, el imputado se trasladaba en un vehículo vinculado a él, lo que también permitía acreditar su

participación, además del patrón común de los delitos. Finalmente, destacó el sesgo de género en la elección de las víctimas.

**La Defensa del acusado**, por su parte centró su alegato de apertura en la aplicación de la media prescripción, argumentando que entre la fecha del último hecho acusado (13 de diciembre de 2016) y la formalización del imputado (23 de septiembre de 2022) habían transcurrido más de cinco años y siete meses, cumpliéndose los requisitos para su procedencia, según el artículo 103 del Código Penal. Sostuvo que esta circunstancia debía ser considerada como una atenuante de responsabilidad penal y pidió al tribunal que se reconociera su aplicación conforme a derecho.

**Cuarto: Declaración del acusado.** Que, en el transcurso de la audiencia, habiendo sido debida y legalmente informado de los hechos y participación que en los mismos se le atribuyó, en presencia de su defensor, el acusado optó por renunciar a su derecho de guardar silencio y, consecuentemente ejerció su derecho a defensa. Así, expuso que de los delitos que lo acusaban sí los hizo y el motivo era que falleció su madre y se metió en la droga y el alcohol, lo que lo hizo hacer muchas cosas. Era mentir decir que no hizo eso.

*Al examen de su abogada defensora*, precisó que su mamá falleció hacía 9 años. No recordó el año exacto, pero los hechos ocurrieron en la comuna de Recoleta. Reconoció que entre cada hecho transcurrieron un par de horas, o sea, fueron el mismo día, pero no recordó las calles en específico.

Informó que fue detenido el 24 de mayo de 2023. Día en que pasó a control de detención en la ciudad de Puerto Montt y quedó en prisión preventiva.

Contó que fue formalizado en septiembre cuando llegó una notificación, que tenía que presentarse a un juicio por Zoom en el año 2022.

*Durante el contraexamen del Ministerio Público*, afirmó que en esa época vivía en Recoleta. No recordó mes ni año, porque cuando su mamá murió su mente “se fue”. Ni siquiera sabía si era invierno o verano.

Admitió que en Recoleta vivía con su papá, quien tenía un vehículo Suzuki rojo y un Hyundai color plomo. Podía ser que en alguno de esos robos hubiera andado en uno de los vehículos.

Informó que en tres delitos actuó con una mujer.

Explicó que él “hacía la seguridad”, o sea, iba con otras personas y él se quedaba en el vehículo.

Nunca anduvo con un cuchillo.

No recordó haber tomado del pelo a una mujer ni colocarle un paño en la boca.

La otra persona hacía los robos con intimidación y él iba de chofer y se quedaba en el auto, pero sí era “partidario” de los robo con intimidación.

**Quinto: Convenciones probatorias.** Que, los intervinientes de conformidad al artículo 275 del Código Procesal Penal, no arribaron convenciones probatorias, según se señaló en el auto de apertura del presente juicio oral.

**Sexto: Prueba del Ministerio Público.** Que, con el objeto de acreditar los hechos de la acusación y la participación del acusado, el ente acusador aportó la siguiente prueba:

#### **a.- Testimonial**

Consistente en la declaración de los siguientes testigos:

**1.- Marcelo Antonio Contreras Devia, hecho N°5**, sargento segundo de carabineros, quien juramentado señaló que estaba en juicio, porque como funcionario policial el día 14 de diciembre de 2016 acogió una denuncia por robo con violencia en Recoleta cuando estaba de guardia en la Tenencia Ossa.

Detalló que hasta el lugar llegó Fernanda Alonso Millavil la cual sindicó que el día 13 de diciembre de 2016, alrededor de las 21:30 horas, iba por calle Dorsal al poniente y al llegar a José Miguel Carrera en la comuna de Recoleta, descendió de un vehículo gris un sujeto, que vestía entero de blanco, que la empujó arrebatándole su bolso deportivo con medicamentos, su cédula de identidad y dinero, luego huyó al vehículo, lo abordó y se dio a la fuga por Dorsal al poniente.

Indicó que la víctima no avaluó las especies, porque estaba lesionada y aun en shock. Tenía una herida en la espalda que se ocasionó, porque el sujeto la empujó, cayó y quedó lesionada.

*Al ser contrainterrogado por la Defensa, señaló que la denuncia fue el 14 de diciembre de 2016. Y los hechos eran del día anterior, por ende, del 13 de diciembre de 2016, alrededor de las 21:30 horas y llegó al otro día alrededor de las 18:30 horas.*

Reiteró que la víctima iba por calle Dorsal al poniente y una vez que pasó Lemuria ahí el sujeto la abordó. Era en la comuna de Recoleta.

**2.- Carolina Andrea Guzmán San Martín, hecho N°1,** quien juramentada indicó que el hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 12:30 del día. Explicó que recordaba el horario, porque ella venía saliendo de una iglesia e iba caminando con su hija de 10 años por calle Río Colorado y en Raúl Montt se detuvo un vehículo y al verlas caminando se devolvió y dobló por esa calle. Precisoó que era un vehículo gris plata tipo citycar pequeño que iba a gran velocidad y las detuvo. Informó que ella llevaba la cartera en el brazo y a su hija de la mano y al ver eso por instinto acercó a su hija a la reja, entonces se bajó un tipo alto de como 1.75 y moreno. Recordó que era un día de verano y le llamó la atención que el sujeto andaba con un polerón amarrado al cuello y se le veía solo su cara. Además, iba con un cuchillo muy grande con el que la apuntaba, entonces pensó que le iba a llevar a su hija y por eso la tiró hacia la reja y el tipo empezó a forcejear, luego se bajó otro tipo, que también no dijo nada y le tiraba la cartera. Reconoció que no se dio cuenta que la estaba robando, pero fue con tanta fuerza que su cartera salió volando y el sujeto se fue con la cartera y su hija y ella gritaban. Indicó que fue un lapso muy corto, pero muy traumante.

Añadió que el otro tipo, también tenía un cuchillo, pero no le vio la cara y se veía la silueta de una persona dentro del vehículo, luego se metieron rápidamente al auto y se fijó que el auto atrás tenía unas huinchas de embalaje transparente, porque no tenía vidrio y, además vio la patente.

Informó que después con todo el griterío salió una niña, que le entregó la placa patente del auto y cerca vivían algunos personas que la conocían, quienes al escuchar los gritos la fueron a socorrer.

A la semana siguiente en la calle Urmeneta con Diagonal vio el mismo auto y el sujeto comprando completos en un negocio y como estaba el hombre, se asustó mucho, entonces se fue con su marido del lugar.

Contó que el mismo día del hecho fue a declarar en carabineros y, después de eso la citaron para reconocerlo y le era fácil recordarlo por los dos hechos anteriores. Precisoó que fue nuevamente a declarar y le presentaron un set de fotografías y reconoció a uno. No tuvo ninguna duda, porque en ese momento tenía la imagen muy clara en su cabeza.

Explicó que reconoció al que la atacó, porque le vio la cara y como no le dijo nada y no lograba entender lo que pasaba lo miraba todo el tiempo.

*Reconoció al acusado en sala e indicó sus vestimentas.*

Explicó que su cartera era de asas cortas y la mantenía en el antebrazo derecho.

Insistió en que iba caminando por la calle y al ver el auto rápido acercó a su hija contra la reja, después comenzaron con el forcejeo y siempre pensó que le querían quitar a su hija. Dijo que no era necesaria tanta violencia.

Insistió que los dos sujetos estaban con polerones y los tenían amarrado en el cuello.

Describió el cuchillo e indicó que era de unos 20 o 30 cms. Era muy grande. Era del porte del antebrazo entero.

Detalló que su cartera era negra con estampado blanco y adentro estaba la billetera con sus documentos, tarjetas de crédito, un cosmetiquero y una biblia.

Contó que cuando se fueron una mujer le dio la patente del vehículo y era un vehículo Hyundai cuya patente empezaba con "G".

Para efectos de refrescar memoria se leyó su declaración de fecha 22 de junio de 2017 en la Fiscalía e indicó que la patente era GGDT 32.

Supo que hubo más robos en la plaza Raúl Montt con las mismas características, hombres con un auto con el scotch atrás y las víctimas eran mujeres.

*No fue contraexaminada por la Defensa.*

**3.-Valentina Antonia Guerrero Zúñiga, hecho N°3**, quien juramentada manifestó que estaba en juicio, porque el 13 de diciembre de 2016 como a las 4 o 4:30 de la tarde estaba caminando hacia una estación de metro por calle Bismuto y en la esquina con Dora de la comuna de Recoleta la interceptó un auto, que se detuvo por detrás de ella desde donde se bajó una mujer, que le dijo "ya conchetumadre" y la amenazó con arma blanca e intentó forcejear con su bolso y le quitó su celular, pero se demoró más con su bolso, porque estaba cruzado y en eso se bajó un hombre, que llegó por detrás de ella. Agregó que lo vio y terminaron de asaltarla, entonces se llevaron su celular, su billetera, sus documentos, plata en efectivo, maquillaje y se subieron al auto y partieron.

Indicó que logró memorizar la PPU y fue de inmediato a hacer la denuncia.

Recordó que la PPU era GGDT 02, le parecía.

*Para efectos de evidenciar una contradicción*, leyó su declaración de fecha 7 de abril de 2017 en la Birom de Independencia a las 10:30 horas y señaló que era GGDT 32.

Indicó que, después de la denuncia, pasó un tiempo y fue la policía de investigaciones a tomarle declaración y a reconocer a sus asaltantes en fotografías. Detalló que le mostraron distintas fotografías y coincidían con la descripción, que dio ese día, en la denuncia. Agregó que reconoció a la mujer y al hombre que la asaltaron. No tuvo ninguna duda y, en ese momento fue fácil reconocer sus rostros.

*Reconoció al acusado en sala e indicó sus vestimentas.*

Indicó que el sujeto iba en el automóvil y cuando lograron con la mujer llevarse su cartera ambos se fueron. Precisó que el sujeto le dijo amenazas y garabatos para hacerlo lo más rápido posible.

*No fue contraexaminada por la Defensa.*

**4.-Daniela Valeska Martínez Acuña, hecho N°4**, quien juramentada dijo que estaba en juicio, porque el día 13 de diciembre de 2016 salió, aproximadamente, a las 19:30 horas a una farmacia frente del metro Zapadores a retirar una receta magistral e iba a pie y a la vuelta se fue por avenida Recoleta hacia calle Raúl Montt y un auto hizo una maniobra para entrar a un servicentro. Detalló que era un Chevrolet Spark GT gris, que tenía la puerta trasera del lado copiloto chocada, entonces se detuvo para que entrara y el conductor se agachó y le hizo un gesto con la mano que pasara, luego dobló hacia Raúl Montt, después sintió que alguien corría detrás de ella y se dio vuelta y era una mujer que le tiraba el bolso y como opuso resistencia, le pegó un combo en la cabeza, siguieron forcejeando y alguien frenó al lado y era el mismo auto del que se bajó el hombre y le dijo "quédate tranquilita loca, entrega todo", luego la agarró del

pelo y le puso el brazo como afirmándola y ella trató de pegarle un codazo hacia atrás, mientras Camila seguía tirándole el bolso, pero él le puso algo en la cara y cuando ya estaba en el auto y reaccionó vio a la mujer con un peto flúor y calzas floreadas, a quien le rompió el tirante de la polera, entonces ella le volvió a pegar en la cabeza y la empujó, entonces quedó colgando en la puerta y la arrastraron como media cuadra y él como que aceleró y frenó, entonces cayó hacia la cuneta y ellos siguieron por calle Raúl Montt

Después llegaron unos jóvenes cuando estaba mareada y trató de sentarse y le preguntaron si estaba bien, después llegó otro joven en un auto y los jóvenes decían que la tiraron del auto, entonces él se ofreció para llevarla a la casa, pero no quiso y se fue caminando.

Explicó que el hombre le puso algo en la cara.

*Reconoció al acusado en sala.*

Informó que la comisaria le hizo reconocimiento de fotografías de Camila y Jeffrey.

Recordó que era un paño lo que le colocó en la cara y le quedó manchada la polera y cuando llegó a los carabineros vio que le quedó la rueda marcada en la ropa y, tenía los pies y el brazo rasmillado.

Informó que el trapo tenía algo con alcohol y fue muy corto el lapso.

Explicó como quedó en el auto, porque la puerta estaba entreabierta, ya que estaba chocada, pero no recordó bien cómo entró al vehículo.

Agregó que se sentía como medio atontada además, le habían pegado hartito en la cabeza.

Reiteró que estaba sentada atrás y en el auto estaba la mujer y el hombre conduciendo.

El lapso fue como media cuadra en la misma calle Raúl Montt.

Indicó que en su bolso llevaba los medicamentos y algunos documentos, además de 30 mil pesos en efectivo y le sacaron el reloj y el bolso.

Informó que llegó a su casa y tuvo que golpear, porque se llevaron sus llaves y su mamá se ofuscó mucho, entonces le avisó a su hermana que vivía cerca, quien llegó con su cuñado y ellos llamaron a carabineros y le preguntaron para llevarla al hospital a constatar las lesiones, pero no quiso, porque en ese momento tenía mucha rabia.

Explicó que se enteró de los nombres, porque hubo gente que vio eso y de los “colectivos piratas” uno le contó a su mamá y ella le dijo “ella era mi hija”. Explicó que ellos sabían, porque tomaban a pasajeros en hora punta y como rondaban sabían lo que andaban haciendo y le dijo los nombres y dónde vivían. Agregó que Camila vivía cerca de una excompañera y cuando le tocó con la comisario Jessica Rebolledo, ahí dio esa información.

Recordó que en junio o julio del año siguiente la citaron a la policía de investigaciones y le comentaron de casos similares en el mismo cuadrante y de la descripción de las personas, pero ella era quien más antecedentes tenía, porque ya sabía quiénes eran.

Después siguieron en contacto por vía telefónica y le iban a mostrar como 30 fotografías y en un papel vio fotografías de solo hombres y lo identificó a él, después eran fotografías solo de mujeres y, también la identificó a ella.

*No fue contrainterrogada por la defensa.*

**5.- Dafne Alexandra López Erices, testigo de contexto,** quien juramentada señaló que estaba por un robo ocurrido en el año 2016. No tenía muchos recuerdos por el tiempo, pero iba al metro Dorsal en la comuna de Recoleta por calle La Serena , en horas de la tarde y llegó una moto con un hombre y una mujer desde donde se bajó la mujer y forcejearon, entonces ella le quitó la cartera, pero se cayó el celular y después se devolvió a pegarle a la mujer, luego se subió a la moto y se fueron.

No recordó el mes, pero creía que era verano.

Explicó que forcejeó, porque la mujer le quitó la cartera por la espalda y el forcejeo se produjo, porque el morral lo llevaba cruzado.

Explicó que la mujer le trató de quitar la cartera, entonces forcejeó con ella y como se hizo tira el tirante se la llevó.

En la moto había un hombre, pero con casco, entonces no le vio la cara.

Al llegar a la casa llamó a carabineros y le tomaron la declaración en su casa y no supo nada más hasta ayer que la llamaron para presentarse.

En la cartera tenía sus documentos, plata y su cédula de identidad.

*No fue contrainterrogada por la defensa.*

**6.- María Eliana González Tapia, testigo de contexto hecho N°5**, quien indicó que estaba en juicio, porque ese día su amiga llegó llorando a la casa que la habían asaltado y llegó toda cochina. Le dijo que un auto la venía siguiendo y que la persona se bajó del auto y le quitó las cosas e incluso le pegó. Le dijo “tal auto”, entonces le pidió que describiera a la persona y ella le dijo “tal persona”, porque ya lo había visto y sabía lo que andaba haciendo, entonces se lo mostró, porque él al otro día andaba y le dijo que sí era y andaba en un auto plomo chiquitito.

No recordó la fecha, pero fue el año 2016.

Informó que su amiga era Fernanda no recordó su apellido.

Recordó que le dijo que fue en Dorsal.

Ella sabía que él esa misma semana andaba haciendo lo mismo y fue el auto lo que le hizo saber y el nombre de la persona era Jeffrey, porque ella vivía por ahí mismo.

Indicó que Fernanda lo vio y lo reconoció y le dijo “sí él es”.

*En el contraexamen de la Defensa*, indicó que su amiga le dijo que fue asaltada por un hombre, que estaba en un auto gris pequeño y en base a eso concluyó que era Jeffrey y, además, porque ella ya había visto el auto.

*Aclarada por el tribunal* indicó que su amiga le dio las características de cómo era la persona y además sabía que él andaba haciendo esas cosas.

**7.- Jessica Elizabeth Tapia Arévalo**, comisario de la policía de investigaciones, quien juramentada manifestó que estaba en juicio, porque fue parte de la toma de declaraciones a dos testigos de un hecho de robo con violencia donde el imputado era Jeffrey Llanillos Plaza y fue testigo en dos reconocimientos fotográficos de María González Salas que era testigo y de Fernanda Alonso Millavil.

Le tomó declaración a Fernanda Alonso Millavil y a la amiga que era María González Salas.

Indicó que Fernanda le dijo que iba por calle Dorsal caminando con un bolso deportivo y sintió un vehículo muy rápido, que frenó de manera brusca desde el cual se bajó el hombre, quien era el chofer y forcejeo con ella para quitarle las especies, logró el cometido y la tiró al suelo, pero ella trató de correr en sentido contrario y Jeffrey se fue con las especies y dijo que no conocía al imputado, pero era de 1.7 de estatura, de tez morena y cabello negro.

Contó que María González le dijo que ella tomó conocimiento del hecho y fue a visitar a su amiga, quien le narró lo vivido y ella le dijo que lo conocía, que era el Jeffrey, que anda en la Chimba, en un auto robando de color gris, chocado y, que no era la primera víctima de él. Que ya había actuado de la misma forma, andaba robando de manera frecuente en los alrededores y generalmente abordaba a mujeres.

Informó que a cada uno se le hizo un reconocimiento con dos sets de 10 fotografías cada uno con características y edades similares y ambas reconocieron a Jeffrey Llanillos como el autor del delito.

Indicó que como investigadores lo identificaron, porque eran muchas más víctimas con el mismo modus operandi y las víctimas decían que andaba con una mujer baja y delgada y que algunas veces se bajaba la mujer y otras veces el varón que la acompañaba y daban las mismas características como tez morena y se trasladaban en un vehículo plomo pequeño y chocado.

Ese hecho ocurrió en el año 2016, pero no recordó la fecha.

*No fue contrainterrogada por la defensa.*

**8.- Sara Elvira Zamora Rivera, víctima hecho N°2**, quien juramentada dijo que estaba en juicio, porque el día 13 de diciembre de 2016 pasadas las 10 de la mañana iba saliendo de su trabajo por la calle Raúl Montt y vio un vehículo chico gris parado que estaba abollado, entonces pensó que lo habían chocado y siguió caminando y de repente le salió una mujer por la espalda y le tiró la cartera, pero se defendió, sin embargo ella fue más fuerte y le pegó en un poste en la cabeza, también la arrastró por el suelo hasta que se le cortó la cartera y vio que bajó un hombre del auto gris y le dijo a ella “déjala, déjala” muchas veces y de ahí como le tiró tan fuerte al final le quitó la cartera y se subieron al auto y se fueron y quedó con todo robado.

Indicó que el hombre era el conductor. Se fue con ella, cuando vio que ella le quitó la cartera. Ella fue la agresiva, él no actuó. De vuelta él se fue conduciendo.

Informó que en su cartera tenía sus documentos, su teléfono, sus lentes, 80 mil pesos, una cadena de plata hasta sus cigarros. Tuvo preocupación por sus tarjetas y su cédula de identidad.

Contó que respecto de sus lesiones quedó con los brazos rasmillados y le dolía el cuello, entonces se dirigió al tiro a Zapadores y los carabineros la llevaron a constatar lesiones a la población la Juanita Aguirre.

Eran lesiones simples, rasmilladuras, como cuando la pasan por el suelo.

A carabineros les contó lo que le pasó y la llevaron a urgencia.

*No fue contrainterrogada por la Defensa.*

**9.- Fernanda del Carmen Alonso Millavil, hecho N°5**, quien juramentada señaló que estaba en juicio, porque una tarde noche el 13 de diciembre de 2016 iba caminando por Avenida Dorsal en la comuna de Recoleta con un bolso deportivo gris con un libro en la mano y en el bolsillo del short llevaba un celular y sintió un ruido de vehículo fuerte, entonces se hizo al costado izquierdo. Detalló que era un vehículo pequeño de color y gris, que se paró a su lado y rápidamente abrieron la puerta y le dijo unas palabras que nunca olvidó “esta wea la vamos a hacer súper corta”, entonces reaccionó corriendo hacia atrás, no sabía cuántos metros, pero él la golpeó con sus dos manos en la parte del hombro, la botó al piso y la arrastró. Forcejeo muy poco y logró quitarle el bolso y salió arrancando. Añadió que se hizo heridas, raspones en el codo, en la parte lateral izquierda del hombro y en las rodillas. Recordó que gritó y pese a que había gente nadie la ayudó y él se subió al auto corriendo y se fue.

Precisó que era entre las 9 y las 9:40 de la noche.

Fue a dos cuadras antes de llegar a La Plata o avenida Carrera en la comuna de Recoleta.

Reiteró que cuando ella iba caminando sintió el ruido de un vehículo muy acelerado y miró hacia atrás y se hizo al costado, entonces el auto frenó, él abrió la puerta y ella corrió cuando él le habló. Recordó que el tipo que se bajó y le dijo “esta wea la vamos a hacer súper corta”. No se fijó se iba con alguien con más. En ese momento lo vio chascón con el pelo no tan largo y no sabía si andaba ebrio o bajo la influencia de una droga, delgado y más alto que



ella, de tez morena no tan blanco y andaba con un pantalón o jeans a mitad de trasero y se le veía el short y al parecer una polera blanca.

Ella en el bolso tenía su billetera sus documentos medicamentos antidepresivos y el celular no se lo vio. Había entre 10 y 15 mil pesos en efectivo. Como se quedó con el celular logró llamar a su hermana.

Contó que salió un vecino con una señora de edad y la socorrieron y le dieron agua, entonces se quedó sentada en la vereda asustada y nerviosa, después se fue a la casa caminando.

Rememoró que esa noche no pudo dormir y al otro día tuvo mucho miedo de salir, porque siempre caminaba por ahí hasta muy tarde, entonces llamó a su trabajo avisando que no iba a ir, estaba muy adolorida, después fue a carabineros a colocar la denuncia y a constatar lesiones y después la llamaron de la policía de investigaciones.

Contó que le comentó a su vecina y le pidieron describir el auto y recordó que tenía un golpe en la puerta del chofer y atrás tenía una bolsa de nylon, no tenía vidrio. Le preguntaron cómo era la persona y le dijeron que era una persona del sector que ya había asaltado a varias personas, entonces su vecina y su marido lo nombraron como Jeffrey, porque era muy conocido del sector, parecía que se crío en el barrio y después escuchó que esa persona sí andaba asaltando a más personas y por eso hizo la denuncia, porque se asustó al saber que era del sector, entonces no podía quedarse callada.

La policía de investigaciones la citó y le hicieron varias preguntas, además de reconocimientos con fotografías e indicó que señaló a una persona de la que no estaba muy segura, pero creía que era la persona y la persona que le mostró las fotografías le dijo que sí era. La fotografía de la persona no era muy similar, porque lo vio chascón y bajó el efecto del alcohol o drogas y en la fotografía estaba más rellenito de cara.

Reiteró que se raspó la parte trasera izquierda del hombro, era bien feo, también se raspó la rodilla y el codo izquierdo y la mano. Se hizo heridas.

Intentó memorizar la PPU y la anotó, pero cuando fue a carabineros perdió el papel, pero a los días haciendo aseo encontró el papel, pero ahora no la recordaba.

Dijo que lo vio pasearse muchas veces por el sector y, una vez en un negocio no lo reconoció y su vecina le hizo gestos, pero no captó y de ahí empezó a verlo muchas veces. Sostuvo que reconoció al de la fotografía que le habían mostrado.

Creía que sí era la persona que estaba en la sala. No lo quiso mirar más.

*No fue contrainterrogada por la defensa.*

**10.- Maximiliano Andrés Astorga Pávez**, hecho N°2, cabo primero de carabineros, quien juramentado señaló que estaba en juicio, porque tomó la denuncia de la señora Sara y fue un procedimiento en el año 2016 por un robo con violencia.

**11.- Ilenia Nazaret Cortés Garabito, comisario de la policía de investigaciones**, quien juramentada señaló que estaba declarando porque estaba trabajando en el año 2016 y 2017 en el Bricrim Independencia en la oficina de análisis donde le correspondía ordenar los decretos, ingresarlos y buscar patrones o características en común y primero se endosó una orden de investigar a la comisaria Rebolledo, quien comenzó a trabajar y mientras realizaba eso llegaron otras orden de investigar con las mismas características del modus operandi, del vehículo y se repitió tres veces la patente. Eran robo con violencia e intimidación en donde sujetos transitaban en vehículo y atacaban a mujeres, bajaban del vehículo en forma violenta, les quitaban la cartera y huían y en algunas participaba, además una mujer y en otros era solo el hombre, entonces le endosó a la comisaria todas las ordenes de investigar con la misma patente y en los

empadronamientos apareció el nombre de “Jeffrey anillo” era el apodo y empezaron a ver que, también los hechos ocurrían en un cuadrante pequeño, no eran muy separados los hechos y de ese “Jeffrey anillo” les llegó una supuesta dirección en Urmeneta y de la niña, que era Camila ,en Raúl Montt, entonces con eso se buscó en las bases de dato y se llegó a la niña, pero no al Jeffrey con en el empadronamiento posterior de la comisario Rebolledo surgieron más antecedentes hasta que se llegó al dueño del auto era de un Llanillos y parecía que la dirección era Urmeneta, entonces se buscó en la base de datos y salió que el auto era de Juan Carlos Llanillos y su red familiar arrojó que eran padre e hijo, entonces cotejaron eso con las características aportadas por las víctimas y todas coincidían que era un hombre de 1.70 o 1.75, moreno y contextura media y en todos los hechos fue muy violento con ellas.

Además de la revisión de las bases de datos hizo los reconocimientos fotográficos a las víctimas y a una testigo que llevó una víctima conforme al protocolo se practicó con dos sets de 10 fotografías cada uno y en uno se encontraba el sospechoso, además se realizó en una sala privada mostrándole una a una las fotografías y todas reconocieron a Jeffrey como el sujeto que las atacó.

Informó que las víctimas eran Daniela Martínez Acuña, luego Fernanda Alonso Millavil con la testigo que llevó María González Salas, Valentina Guerrero Zúñiga y Carolina Guzmán San algo y la última víctima andaba con su hija pequeña, que tenía 11 años al día de los hechos.

La mayor parte de los hechos ocurrieron el día 13 de diciembre de 2016 y el de Carolina, también en diciembre de 2016 desde las 10 en adelante preferentemente en la tarde y a mujeres que iban solas. Carolina fue el 4.

Señaló que Carolina iba caminando con su hija y sintió un vehículo y un sujeto se bajó un cuchillo y creyó que le iban a quitar a la pequeña, pero la asaltó.

En general todas decían que el vehículo era pequeño de color gris con un choque, que llegaba en forma violenta y se bajaba uno, los dos o ella y le quitaban las carteras y los bolsos.

Informó que la PPU era GGD 32 correspondiente a un vehículo marca Hyundai y de hecho una testigo recordó que la marca tenía una “H”.

*No fue contrainterrogada por la defensa.*

**12.- Jessica Andrea Rebolledo Astorga**, todo, comisario de la policía de investigaciones, quien juramentada señaló que estaba en juicio, porque realizó un informe del imputado Jeffrey Llanillos Plaza donde los delitos eran robo con violencia e intimidación y estuvo a cargo del procedimiento.

En primera instancia se le endosó una orden de investigar con dos víctimas por robo con violencia. Las víctimas eran Sara Zamora Riveros y Daniela Martínez Acuña, quienes denunciaron que durante el día 13 de diciembre le habrían robado. Detalló que Sara le señaló que una mujer se bajó de un auto pequeño gris y le tiró la cartera y, en el forcejeo, se bajó un hombre que iba en dirección a ella, pero al cortarse el lazo de la cartera, la mujer salió corriendo y se subieron la vehículo en el sector de Recoleta por Raúl Montt.

Respecto de Daniela fue parecido el modus operandi, se bajó un hombre de un auto pequeño, que la tomó al tratar de arrancar y la tiró al suelo, la arrastró y le tomó el bolso y se fue.

De acuerdo a la investigación se repetían dos hallazgos, el vehículo, el hombre y la mujer, entonces se empadronó el sector y tomó contacto con Cristina Caroca Dinamarca, dueña de un negocio, quien informó que en el sector andaba un hombre en un auto gris y se cometían robos a mujeres que andaban solas por el sector. Indicó que eran dos sujetos, pero no sabía si dos hombres o un hombre y una mujer.

También se tomó contacto con una vecina de nombre Eugenia Montenegro Cortes, quien dijo que a una vecina la robaron desde un vehículo gris del que se bajaron sujetos.

Sostuvo que no todas las personas quisieron identificarse por temor, porque las personas eran del sector e indicaron que sería Ricardo Oñate y Camila y que ella vivía en Raúl Montt 970 y la otra persona en Urmeneta.

Con esa información tomó contacto con la comisario Ilenia, que era la encargada de la oficina de análisis y establecieron que en Raúl Montt vivía Camila Ignacia González Fuentealba. Lo que coincidía con las características que había entregado la víctima, no obstante el otro nombre no coincidía, entonces se continuó con la búsqueda y le indicaron que andaba en ese auto Jeffrey, que lo apodaban “el loco Jeffrey anillo” y que él sí vivía en Urmeneta, además se determinó que había tres órdenes de investigar con el mismo modus operandi y donde estaba ese vehículo, en el que la característica era un choque y un vidrio quebrado, entonces se estableció que había más víctimas, que eran Valentina Guerrero Zúñiga Carolina Guzmán San Martín y una tercera que era por amenazas que era Jacqueline Vera y se entrevistó a Fernanda Alonso Millavil. Sostuvo que a esas personas que se entrevistó coincidía el modus operandi y las características del vehículo, que era pequeño de color gris y estaba chocado, además de las del sujeto de 1.7 o 1.75, contextura gruesa, entre 25 a 30 años y pelo ondulado, además dos de las víctimas anotaron la PPU GGD 32 y al consultar la patente en la base de datos, efectivamente, llegaron a un Hyundai i10 año 2014 de color gris a nombre de Juan Carlos Llanillos Bustos, padre de Jeffrey y, su domicilio era Urmeneta 1107, entonces coincidía.

Refirió que Fernanda presentó a María Eliana González Salas, quien dijo que cuando su amiga le contó cómo había sucedido lo asoció al tiro a Jeffrey por el modus operandi y dentro de las víctimas que las habían agredido con un cuchillo Carolina Guzmán estaba con su hija pasó un auto, después se bajó un sujeto con un cuchillo, luego se bajó otro que la tomó por atrás y le acercó otro cuchillo y cuando lograron quitarle la cartera se fueron a bordo del vehículo.

Por su parte, Valentina señaló que la mujer que andaba en el vehículo, también la amenazó con un cuchillo y donde se demoró, se bajó el otro sujeto para ir a ayudar a la mujer, pero entregó la cartera y se fue y ella logró anotar la PPU y notar que tenía un choque en la parte de atrás y le faltaba un vidrio.

Informó que su colega Ilenia hizo después los reconocimientos de las personas para darle transparencia a la investigación, porque ella llevaba la investigación y, en casi todos los casos fueron reconocidos ambos imputados, pero la señora Sara por temor y como no estaba en condiciones no asistió y María González solo reconoció a Jeffrey, porque a la mujer no la conocía.

Reveló que los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2016 respecto de las víctimas Sara y Daniela y, luego aparecieron los nombres de otras víctimas. Fernanda fue el 4 de diciembre y Valentina y Carolina el 13 de diciembre durante el transcurso del día.

Carolina iba con su hija y un sujeto se bajó de un auto con un cuchillo intimidándola y eso fue el 4 de diciembre de 2016. Y Fernanda fue el 13 de diciembre.

Los elementos comunes que los llevaron a determinar que era solo un imputado eran primero que siempre abordaban a mujeres solas y se bajaban los sujetos y les robaban sus especies y andaban en un vehículo pequeño gris con un choque en la parte trasera y un vidrio quebrado.

Las características del sujeto era que era moreno, de contextura gruesa, de 1.70 o 1.75 mt, de 25 a 30 años, pelo negro medio ondulado y ojos café, que andaba acompañado de una mujer.

Informó que los hechos ocurrieron en la comuna de Recoleta en Manuel Montt que era justo la dirección de la mujer que andaba en el vehículo y todos en esa comuna.

*Contrainterrogada por la defensa*, reiteró que hizo diligencias para determinar quién vivía en Urmeneta y las personas le dijeron que el “loco Jeffrey” vivía ahí y fueron vecinos que se empadronaron, pero por temor no quisieron entregar su identidad, ya que eran personas del sector. Estaban atemorizados por lo que estaba ocurriendo en el lugar, pero de hecho, le aportaron unos mensajes de Facebook en un grupo de los antecedentes que tenían respecto de los asaltos con ese vehículo y por eso no podía obligarlas a que entregaran su identidad.

**b.- Documental:**

La Fiscalía, a través de la lectura resumida incorporó los siguientes documentos:

**1.-** Boletín de atención médica de urgencia N°37887 de fecha 14 de diciembre de 2016, emitido por el SAPU Dr. Lucas Sierra. Nombre del paciente: Fernanda Alonso Millavil. Diagnóstico: presenta lesión en la rodilla y en un tercio superior de la rodilla pierna izquierda de carácter leve; herida superficial en la región escapular por fuerte contusión de carácter leve.

**2.-** Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados, correspondiente al vehículo placa patente única GGDT-32. Vehículo automóvil Hyundai plateado año 2014 inscrito a nombre de Juan Carlos Llanillos Bustos fecha de adquirente 18 de enero de 2014.

**3.-** Certificado de nacimiento del acusado Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza, nombre del padre Juan Carlos Llanillos Bustos.

**Prueba de la defensa**

Con el fin de acreditar su petición incorporó la siguiente prueba documental, a través de su lectura:

**1.-** Certificado de viajes de fecha 01 de agosto de 2024 emitido por Policía de Investigaciones Departamento de Migraciones N°45384, firmado por Carlos González Gutiérrez, Asistente Administrativo G°13 Departamento de Migraciones, que señala que el imputado no registra movimientos migratorios por pasos fronterizos habilitados desde el 01 de enero de 2016 a la fecha.

**2.-** Certificado del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de fecha veinte de noviembre de dos mil veinticuatro el que se certifica la fecha de la formalización del imputado, de data 23 de septiembre de 2022, sin que exista querrella en su contra.

**Séptimo:** *Alegatos de clausura y palabras finales del acusado.* A criterio del Ministerio Público, y tal como lo indicó desde el inicio de los tres días que duró el juicio oral, el alegato de clausura sería tan breve como el alegato de apertura. Esa decisión respondió a que, en definitiva, la prueba rendida durante el juicio fue la que habló por sí misma, en particular, a través del testimonio de las víctimas. Cada una de ellas se expresó con claridad, precisión y seguridad respecto de lo que vivieron, observaron, presenciaron y sufrieron. Las declaraciones fueron consistentes en cuanto a la dinámica de los hechos y la participación del acusado en ellos. Cuatro de las cinco víctimas lo reconocieron directamente, no solo mediante los sets de reconocimientos realizados por la Policía de Investigaciones, sino, también en la propia audiencia de juicio oral, donde lo individualizaron con certeza como el autor de los robos ocurridos en el año 2016. Enfatizó que pese al tiempo transcurrido, las víctimas relataron hechos que, evidentemente, no resultaban fáciles de olvidar. La afectación psicológica y física quedó patente en sus testimonios, al describir con detalle la violencia con la que fueron atacadas. Esta violencia no se limitó a lo físico, sino que incluyó un importante componente psicológico, dada la sorpresa, el temor y el número de atacantes —al menos dos en cada ocasión—, mientras transitaban solas por la vía pública. Algunas de ellas evidenciaron aún secuelas al momento de declarar. A lo anterior se sumaron los relatos de las funcionarias policiales, en especial Jessica Rebolledo e Ilenia Cortés, quienes detallaron

las diligencias investigativas, que permitieron determinar la identidad del imputado, corroborando tanto la ocurrencia de los hechos como la participación directa del imputado. Sostuvo que desde el inicio los hechos fueron calificados como robo con intimidación. Sin embargo, la descripción fáctica y los relatos de las víctimas evidenciaron, también el uso de violencia, la cual se constató en al menos un caso mediante certificado de lesiones, pero se manifestó en todos los hechos, a través de la conducta agresiva de los atacantes, particularmente del imputado. En el caso de la víctima Sara, esta relató que el sujeto al que describió como quien se movilizaba en un vehículo gris —coincidente con la descripción de los otros hechos—, si bien no la agredió directamente, descendió del vehículo para cubrir la huida del autor directo y luego escapó con él, configurándose así una participación al menos conforme al artículo 15 N°3 del Código Penal. Informó que casi todos los hechos ocurrieron en su totalidad el 13 de diciembre de 2016, en distintos momentos del día, salvo uno anterior, del 4 de diciembre del mismo año. Esto evidenciaba una planificación y coordinación previa. Destacó que el patrón reiterado fue atacar a mujeres solas, en la vía pública, mediante el uso de un vehículo gris que pertenecía al padre del imputado, información que fue confirmada tanto documentalmente como por el propio acusado en audiencia. La reiteración de la dinámica —asaltos a mujeres solas usando el mismo automóvil— demostraba no solo habitualidad, sino claridad del imputado respecto del modo de actuar, los objetos que pretendía sustraer (carteras y bolsos), y la vulnerabilidad de sus víctimas. Indicó que el trabajo policial, particularmente de las funcionarias mencionadas, permitió esclarecer la identidad del imputado y sustentar los reconocimientos realizados tanto durante la investigación como en el juicio. Las declaraciones de las víctimas, junto con la prueba documental relativa al vehículo y su propiedad, así como la admisión indirecta del propio acusado sobre el automóvil, constituían un cuerpo probatorio coherente, no contradicho, ni entre sí ni por la defensa. En consecuencia, el Ministerio Público consideró acreditada de forma clara y fehaciente no solo la existencia de los hechos, sino la participación del acusado Jeffrey Llanillos como autor del delito reiterado de robo con violencia e intimidación, en grado consumado en todos los casos, y así lo solicitó al tribunal que se dictara condena en los términos planteados en la acusación.

La Defensa, señaló que tal como lo anunció en su alegato de apertura enfatizó que el acusado, desde el primer día del juicio, tomó la decisión de declarar, renunciando a su derecho a guardar silencio. En dicha declaración, reconoció su participación en algunos de los hechos que se le imputaban, manifestando que, en ese entonces, con 26 años, se encontraba atravesando un mal momento personal debido al fallecimiento de su madre, lo cual lo llevó a cometer errores. Actualmente, contaba con 35 años y asumía la responsabilidad de dichas decisiones. No obstante, destacó como defensa su obligación de advertir que algunos de los hechos imputados no fueron acreditados más allá de toda duda razonable. En específico, se cuestionó el hecho número dos, correspondiente al testimonio de la víctima Sara Zamora Rivera, quien nunca reconoció ni identificó al acusado durante su declaración. Sus referencias se limitaron a características físicas genéricas como tez morena, estatura y contextura que podrían aplicarse a cualquier persona. Esta falta de precisión fue reforzada por la declaración del funcionario de la PDI, quien indicó no recordar nada respecto a dicho hecho, retirándose del estrado sin aportar sustento a esa acusación. Asimismo, cuestionó el reconocimiento realizado por la víctima Fernanda Alonso, quien inicialmente no identificó al acusado como su agresor, pero al llegar a la casa de su amiga María Eliana González, entregó una descripción igualmente genérica. Pese a ello, González concluyó de forma específica, que el acusado había sido el autor del hecho, basándose en características como contextura, tono de piel y cabello despeinado. Esta deducción fue considerada por la defensa como una inferencia carente de fundamento sólido. En cuanto al testimonio de la funcionaria de la PDI Jéssica Rebolledo Ortega, indicó que este se basó, principalmente, en la información proporcionada por las víctimas. Aunque reconoció que realizó

investigaciones, también señaló que incorporó antecedentes provenientes, supuestamente, de vecinos del sector, que nunca fueron identificados ni mencionados con claridad. Ante la consulta de por qué esa información no se incorporó formalmente a la carpeta investigativa, respondió que no se empadronó a dichos vecinos por temor, lo cual, a su juicio afectaba la fiabilidad de esa información. En consecuencia, solicitó al tribunal que se desestimaran los testimonios de Sara Zamora y Fernanda Alonso por no haber sido probada la participación del acusado en los hechos respectivos, más allá de toda duda razonable. Paralelamente, planteó una teoría alternativa basada en la aplicación de la institución de la media prescripción, prevista en el artículo 103 del Código Penal. Señaló que los hechos imputados databan del 13 de diciembre de 2016, mientras que la formalización del acusado se produjo recién el 23 de septiembre de 2022, transcurriendo más de cinco años entre ambos eventos. Con ello, alegó la configuración objetiva del requisito temporal, que permitía la aplicación de esa atenuante. Además, enfatizó que la media prescripción no extinguía la responsabilidad penal ni eliminaba la sanción correspondiente, sino que operaba como una atenuante especial fundada, únicamente, en el transcurso del tiempo. A modo de respaldo, citó la jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 389-2017, sentencia de fecha 8 de noviembre de 2017, en la que se reconoce el carácter autónomo y plenamente aplicable del artículo 103 del Código Penal cuando se cumplen los requisitos temporales. En base a lo anterior, solicitó que se reconociera la concurrencia de la media prescripción en la determinación de la pena que, eventualmente, correspondía aplicar al acusado, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Replicó el Ministerio Público y señaló que, a su juicio, el acusado reconoció todos los hechos que le fueron leídos al inicio del juicio, y no solo algunos como indicó la defensa. Esta discrepancia entre la declaración del imputado y la interpretación de su defensa generó una primera contradicción relevante a tener en consideración. En cuanto a la explicación que pretendió justificar los hechos con una supuesta afectación de salud mental derivada de la muerte de su madre, se observó que el imputado ni siquiera recordaba la fecha del fallecimiento cuando se le preguntó, lo cual impidió establecer proximidad temporal entre dicho evento y los hechos delictivos. Además, no se acompañó antecedente alguno que respaldara esa situación personal alegada. En relación con el hecho número 2, que involucra a la víctima Sara Zamora Rivera, la defensa sostuvo que no se acreditó la participación del acusado. Sin embargo, el Ministerio Público reiteró que esto nunca estuvo en disputa, pues desde el inicio del juicio se señaló que en cuatro de los cinco hechos, las víctimas reconocieron directamente al acusado. Precisamente el hecho N°2 fue el único en que no hubo reconocimiento directo. No obstante, la participación del acusado en ese hecho se acredita a partir de una prueba abundante y coherente que el tribunal no podía soslayar: mismo sector geográfico (comuna de Recoleta), idéntica forma de operar, mismo automóvil utilizado, tres víctimas que reconocieron la patente del vehículo, y una coincidencia constante en la fecha —13 de diciembre— en todos los hechos imputados. Asimismo, se observó que en todos los hechos del día 13 de diciembre participó un hombre acompañado de una mujer. Las víctimas fueron todas mujeres solas a quienes se les arrebató un bolso o cartera. Este patrón reiterado evidenció un modus operandi común, lo que fortaleció la hipótesis de la autoría del acusado incluso en el hecho que no tuvo reconocimiento directo. Por tanto, se argumentó que no podía descartarse su participación solamente por la falta de reconocimiento por parte de la víctima. Respecto al hecho número 5, y a la testigo Fernanda Alonso, la defensa sugirió que hubo inducción en el reconocimiento. Sin embargo, se recordó que esta víctima, al momento de declarar en juicio, identificó directamente al acusado como el autor del hecho, con evidente temor que fue apreciable para el tribunal. Además, había realizado un reconocimiento fotográfico previo. La testigo María González, por su parte, no solo reconoció las características del automóvil, sino también las del sujeto, lo que le permitió identificar al acusado con claridad. Esto se basó en elementos

objetivos: lugar, modus operandi, vehículo y características físicas. El Ministerio Público concluyó que los hechos no fueron aislados, sino parte de una serie de delitos cometidos en la misma jornada del 13 de diciembre, cuya reiteración fue conocida por la comunidad, lo que explicaba, también el temor de los vecinos a prestar declaración. Así, reiteró que existían antecedentes contundentes, que permitían acreditar la participación del acusado no solo en los hechos reconocidos directamente por las víctimas, sino también en aquellos en que esa identificación no se produjo, debido a la fuerza probatoria del conjunto de evidencias aportadas durante el juicio.

Por su parte la Defensa al replicar señaló que el acusado, desde el inicio del juicio, renunció expresamente a su derecho a guardar silencio y decidió prestar declaración. Sin embargo, enfatizó que dicho acto, por sí solo, no resultaba suficiente para establecer una condena, ya que era el Ministerio Público quien tenía el deber de sustentar la acusación con medios probatorios que acreditaran la responsabilidad penal del imputado más allá de toda duda razonable. A ese respecto, sostuvo que subsistían aspectos relevantes del caso, que no habían sido aclarados satisfactoriamente durante el juicio. Uno de los puntos fue el relacionado con la identificación del vehículo utilizado en la comisión de los delitos. Si bien, reconoció que varias víctimas coincidieron en señalar características similares —como el color del automóvil o daños visibles en su estructura—, también se advirtieron contradicciones. Por ejemplo, mientras la víctima del hecho número 4 señaló que el vehículo era marca Chevrolet, la funcionaria policial a cargo de la investigación afirmó que se trataba de un Hyundai. Esas inconsistencias, a juicio de la defensa, resultaban significativas y ponían en duda la solidez de la acusación, en cuanto a elementos materiales claves del caso. También cuestionó la afirmación del Ministerio Público sobre la supuesta unicidad de territorio y patrón delictivo. Aunque se alegó que todos los hechos ocurrieron en un mismo sector de Santiago y bajo un modus operandi semejante, se sostuvo que esa argumentación resultaba genérica. Para ilustrar este punto, citó el caso de la testigo Dafne López, quien también fue víctima de un robo en esa jurisdicción, siendo atacada bajo circunstancias parcialmente distintas, toda vez que en su caso, los agresores se movilizaban en una motocicleta y no en un automóvil, como se habría dado en los otros hechos. Así, la defensa insistió en que, si bien se presentaron elementos que podrían apuntar a cierta reiteración en el modo de actuar, no se había logrado cerrar plenamente el círculo probatorio. Persistían aristas no esclarecidas que, a juicio de la defensa, el Ministerio Público no logró subsanar a lo largo del juicio. Por estas razones, solicitó al tribunal tener en consideración estas observaciones al momento de valorar la prueba y emitir su fallo.

*En las palabras finales el acusado nada señaló.*

**Octavo: Elementos del tipo penal imputado.** Que el delito de robo con violencia o intimidación, materia de la acusación oficial, requiere para su configuración la apropiación de especies muebles ajenas, con ánimo de lucro, obtenida mediante el uso de violencia o intimidación sobre las personas de las víctimas.

De este modo es posible estimar sucintamente, como elementos básicos del tipo penal que deben ser probados para que exista propiamente el delito de robo con violencia y/o intimidación: **1°** una *apropiación*, esto es, la sustracción de una cosa de la esfera de resguardo de una persona con el ánimo de comportarse de hecho como propietario de ella; **2°** que la cosa apropiada sea *mueble*, definida en nuestro ordenamiento jurídico como aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro, mediante el uso de una fuerza externa; **3°** que esa *cosa sea ajena*, es decir, aquellas respecto de las cuales una persona distinta del hechor, detenta la propiedad o la posesión; **4°** que se actúe *sin la voluntad de su dueño*, expresión que significa actuar no sólo sin el consentimiento sino también contra la voluntad del propietario o poseedor de la cosa; **5°** que exista *ánimo de lucro*, el cual se puede colegir del hecho de la sustracción, bastando que se tenga en vista al ejecutar la acción, sin que se requiera de un enriquecimiento real; y **6°** *Intimidación* o

violencia, que es toda energía o fuerza física o moral que se aplica directamente sobre la persona de la víctima. Además el artículo 439 del Código Penal, señala que se estima por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas, ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar la manifestación o entrega.

No debe perderse de vista, como criterio interpretativo que se trata de un **delito complejo pluriofensivo**, cuyos **bienes jurídicos protegidos de manera directa** en esta figura penal, son **la integridad física de las personas y la propiedad**.

En el caso que nos ocupa el acusador debe precisamente establecer, más allá de toda duda razonable, que al acusado Llanillos Plaza le ha cabido participación criminal en los hechos contenidos en la acusación. En efecto, el deber de acreditación más allá de toda duda razonable de la hipótesis imputativa por parte del persecutor debe verificarse en relación con los elementos fácticos concretos contenidos en la acusación (los cuales comprenden los elementos constitutivos de los tipos penales y de las agravantes inherentes a la comisión del hecho), los cuales están indisolublemente conectados con premisas fácticas referidas a la temporalidad, conductas específicas, espacio y contexto de la imputación. Luego, esas premisas fácticas deben ser susceptibles de subsumirse en los elementos normativos del tipo penal conforme al mandato de taxatividad consagrado en el artículo 19 N°3 inciso final de la Constitución Política de la República. Es decir, la actividad probatoria de la parte acusadora debe inequívocamente dirigirse a la corroboración del núcleo fáctico de la acusación, transcrita literalmente en el motivo segundo de esta sentencia. Lo que se viene explicando es lo que permite satisfacer la irreductible exigencia del artículo 342 del Código Procesal Penal en orden a que la sentencia, en caso de ser condenatoria, establezca con claridad los hechos que se dan por probados en el juicio y que sirven de base a una condena, vinculando tales hechos con los medios de prueba que sirvieron para acreditarlos. Exigencia que, siempre es bueno recordar, está delimitada a los contornos fácticos de la acusación, en virtud del principio de congruencia consagrado en el artículo 341 del Código Procesal Penal. Y ello, aunque resulte evidente, es lo que orienta, delimita, condiciona y determina la actividad probatoria de la hipótesis acusatoria y el subsecuente control epistémico que de dicha actividad deben realizar los adjudicadores en la esfera de la valoración probatoria.

**Noveno: Presupuestos fácticos no discutidos.** Que, a la luz de la prueba rendida durante el juicio oral, tanto testimonial como documental, valorada conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y 297 del Código Procesal Penal y considerando las alegaciones de las partes e incluso la propia declaración del acusado, es posible determinar una serie de presupuestos fácticos no controvertidos, a saber:

1º Que los hechos ocurrieron en la comuna de Recoleta los días 4 y 13 de diciembre de 2016. Este punto fue ratificado por todas las víctimas que declararon en juicio. Carolina Guzmán del hecho 1 informó que ocurrió el día 4 de diciembre de 2016 y las afectadas Valentina Guerrero del hecho 3, Daniela Martínez del hecho 4 y Fernanda Alonso del hecho 5, dijeron que fueron asaltadas el día 13 del mismo mes y año. De este modo sus declaraciones coincidieron en tiempo, según informaron a su vez los respectivos funcionarios policiales como el sargento Contreras, la comisario Cortés, Jessica Rebolledo y el mismo imputado, quien reconoció que los hechos ocurrieron, según recordaba el mismo día.

2º Que en todos los hechos participó un vehículo gris, pequeño, con daño visible en su parte trasera, específicamente con un vidrio roto reemplazado por cinta o nylon como de embalaje. Este elemento fue descrito por varias víctimas —entre ellas Carolina Guzmán y Valentina Guerrero, lo que fue confirmado por la documental aportada



por el Ministerio Público, consistente en el certificado de inscripción vehicular del Hyundai PPU GGDT-32, registrado a nombre de Juan Carlos Llanillos Bustos, padre del acusado, según se pudo acreditar del documento consistente en el certificado de nacimiento del acusado. Por lo que no cabe duda el padre del acusado es el dueño del vehículo antes individualizado.

3° Que el imputado participó en los hechos, al menos como conductor o acompañante. Él mismo lo reconoció en juicio, indicando que prestaba funciones de “seguridad” o vigilante, permaneciendo en el vehículo, mientras los demás robaban. Con todo, su presencia en el lugar fue confirmada por las víctimas Valentina Guerrero, Carolina Guzmán y Daniela Martínez, quienes lo identificaron tanto en juicio como en diligencias de reconocimiento fotográfico.

4° Que en al menos dos de los hechos participó una mujer junto al acusado. Las víctimas identificaron esta circunstancia, a saber, Valentina Guerrero y Daniela Martínez, quienes relataron que fueron abordadas por una mujer, acompañada de un hombre. La prueba de contexto aportada por las comisarias Jessica Rebolledo e Ilenia Cortés confirmó esa coautoría, además el propio acusado reconoció que actuó con una mujer en algunos hechos.

5° Que el patrón de ataque fue reiterado, primero, las víctimas eran mujeres que transitaban solas por la vía pública, quienes fueron abordadas con violencia física o mediante la amenaza con armas blancas, aprovechando la indefensión en que se encontraba, a quienes se les sustrajo el bolso o cartera que portaban consigo y, luego el acusado junto a algún otro partícipe huyeron en un vehículo pequeño de color gris. Este modus operandi fue detallado por todas las víctimas y por testigos de contexto como María González y sistematizado en los informes de la PDI expuestos por las comisarias Rebolledo y Tapia, que dieron cuenta de los dichos o versiones de los vecinos del lugar.

6° Que la PPU GGDT-32 fue registrada por al menos tres víctimas y consta en las declaraciones de Valentina Guerrero y Carolina Guzmán. Ambas anotaron o recordaron la patente en forma coincidente. Inclusive una de las víctimas, señaló que luego de ser asaltada al llegar a su domicilio anotó en un papel la patente, el cual perdió, pero luego lo encontró haciendo aseo. Dichos que refuerzan la credibilidad del relato atendida la particularidad del mismo. Además, la documental entregada por el Ministerio Público corroboró que esa placa correspondía al vehículo Hyundai gris a nombre del padre del acusado.

7° Que las características físicas del imputado —tez morena, estatura media (1.70–1.75), contextura media y cabello oscuro— fueron mencionadas en forma coincidente por múltiples víctimas, incluyendo a Fernanda Alonso, Carolina Guzmán y Daniela Martínez. Estas descripciones fueron clave en el reconocimiento fotográfico, practicado por la PDI conforme a los protocolos establecidos, y confirmadas por las funcionarias Jessica Rebolledo y Tapia.

8° Que las lesiones sufridas por Fernanda Alonso fue constatada por un facultativo y de ello se dio cuenta de acuerdo con el dato de atención de urgencia, incorporado a través de su lectura en juicio y calificadas como leves. También dio cuenta de las lesiones que sufrió la afectada Martínez. En ambos casos detallaron heridas en brazos, hombros y piernas, coincidentes con los relatos de arrastre y caída producto del forcejeo con los asaltantes.

9° Que existió una labor sistemática de empadronamiento por parte de la PDI, que identificó la existencia de múltiples hechos con iguales características, centrados en un cuadrante reducido del sector Recoleta. Por lo que fue de suma importancia ; tanto la fecha como el lugar de ocurrencia de los múltiples hechos, lo que inclusive guarda relación con el domicilio del padre del imputado y la participante Camila, según arrojó la red familiar de los partícipes y los domicilios que se mantenían en la base de datos de la policía.

En definitiva, todos estos presupuestos fácticos cuentan con respaldo probatorio claro y coherente en juicio y, no fueron objeto de controversia efectiva por ninguna de las partes, lo que los transforma en hechos jurídicamente establecidos para efectos de dictar sentencia conforme a derecho.

**Décimo:** *Valoración individual de cada medio de prueba.* Al valorar conforme a las reglas de la sana crítica y lo dispuesto en los artículos 295 y 297 del Código Procesal Penal, a la luz del tipo penal de robo con violencia o intimidación y los presupuestos fácticos contenidos en la acusación, se puede tener por asentado que la declaración de **Carolina Guzmán San Martín** (Hecho 1), su testimonio fue fundamental para establecer la existencia del hecho y los elementos del tipo penal. Relató con claridad cómo fue abordada por dos sujetos, uno de los cuales portaba un cuchillo de gran tamaño. Fue intimidada y le arrebataron de manera violenta su cartera. Su declaración permitió acreditar: la apropiación de especie mueble ajena; el ánimo de lucro; la intimidación que en su caso estuvo dada por el uso de un arma blanca. Además, en cuanto a la participación reconoció al acusado en juicio y en la diligencia de reconocimiento fotográfico, lo que permitió establecer su autoría.

Por su parte, **Valentina Guerrero Zúñiga** (Hecho 3). Señaló que fue interceptada por una mujer que la amenazó con un cuchillo y, ante su resistencia, intervino un hombre (el acusado) para lograr sustraer sus pertenencias, quien premunido de un cuchillo venció su resistencia y se llevó su bolso. También reconoció al acusado en juicio y en las fotografías que le exhibieron en la diligencia de reconocimiento. Un dato importante de su declaración es que fue una de las afectadas que aportó la patente del vehículo. Por lo mismo, su relato fue relevante para establecer, nuevamente el uso de un arma blanca, acreditándose la intimidación que requiere el tipo penal en función de la apropiación de la especie mueble ajena. Con respecto a la participación del acusado. Tal como se señaló aportó además de las similitudes en el modus operandi el uso del vehículo Hyundai gris y los datos de la patente, elemento esencial en la reiteración del patrón delictivo y el establecimiento de la participación del imputado en el hecho.

A su vez, **Daniela Martínez Acuña** (Hecho 4), relató que fue agredida por una mujer y, luego el acusado intervino de manera violenta y agresiva, toda vez, que le aplicó un paño en el rostro, la sujetó del cabello, la introdujo en el vehículo y, posteriormente la arrojó del mismo en movimiento. En ese sentido, la afectada detalló las lesiones sufridas, el contenido de lo sustraído y reconoció al acusado. A través de su testimonio se establecieron con claridad los elementos del tipo pena, en el presente caso, una violencia grave ejercida en contra de su integridad física; lo que conllevó al apoderamiento violento de una especie mueble ajena con ánimo de lucro, sin la voluntad de su dueña, que en todo momento opuso resistencia y; también la ejecución directa del acusado.

Por último, en lo que dice relación con las víctimas, **Fernanda Alonso Millavil** (Hecho 5), indicó que fue interceptada por un sujeto que descendió de un auto gris, la empujó, la arrastró por el suelo y le robó el bolso. Reconoció al acusado en juicio. Su testimonio acreditó, también los requisitos para que se configure el tipo penal imputado por el Ministerio Público al acreditarse una violencia ejercida con el fin de apropiarse de la especie mueble ajena sin la voluntad de su dueña. Ella concurrió a constatar sus lesiones e identificó al imputado.

También se contó con los dichos de **María Eliana González** (testigo de contexto), quien era amiga y vecina de la víctima Alonso Millavil, a quien le señaló haber visto el vehículo gris y al acusado merodeando el sector. Refirió que la víctima Fernanda le relató el hecho el mismo día de ocurrencia y, por su conocimiento previo del imputado, lo identificó como responsable. Su testimonio confirmó de ese modo, la reiteración del modus operandi, la asociación existente entre acusado y vehículo y, que este era un vecino del lugar.

En cuanto al testimonio de **Dafne López** (testigo de contexto), si bien es cierto relató un hecho similar ocurrido en la misma zona y época, aunque en su caso los hechores iban a bordo de una motocicleta y no el vehículo involucrado en el presente caso, lo que fue cuestionado por la defensa, sin embargo, sus dichos aportaron información contextual útil sobre: ataques reiterados a mujeres que transitaban solas por la vía pública, el uso de violencia o intimidación; además de la coincidencia territorial y temporal con los hechos acusados. Lo que, a su vez, explicó el porqué los vecinos entrevistados estaban en condiciones de reconocer al acusado, ya que atendida la multiplicidad de hechos estaban alertados.

En lo que dice relación con los testimonios de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, prestó declaración doña **Jessica Rebolledo**, quien informó que realizó diligencias investigativas como entrevistas, empadronamientos y coordinó reconocimientos fotográficos. De esta forma, confirmó el modus operandi común; la coincidencia en la descripción física del imputado; su vínculo con el vehículo; que las víctimas reconocieron al acusado en sets fotográficos; y, que vecinos lo identificaron como habitual autor de hechos de la misma naturaleza. Reafirmó que todos los elementos del tipo penal estaban presentes en cada caso.

Con respecto a **Ilenia Cortés**, jefa de la unidad de análisis, fue la encargada de sistematizar los casos y, en ese orden de ideas identificó patrones comunes (mujeres solas transitando por la calle en horario vespertino, respecto de las cuales se usó violencia física o intimidación, en un mismo radio de la comuna de Recoleta y que los hechores llegaban en un vehículo pequeño de color gris el cual usaban después para darse a la fuga. En ese sentido, coordinó empadronamientos y, después vinculó el vehículo con el padre del imputado. Practicó reconocimientos fotográficos. Su informe sustenta la existencia de reiteración delictiva y la intervención constante del imputado en los hechos.

Por su parte, **Jessica Tapia**, funcionario de la Policía de Investigaciones, detalló las diligencias de reconocimiento fotográficos que practicó a Fernanda Alonso y María González, quienes sindicaron sin duda al acusado. Confirmó los relatos previos, en el sentido de la violencia usada, el robo de los bolsos o carteras de propiedad de las afectadas y descripción del imputado. Preciso que las diligencias de reconocimiento se hicieron con estricto apego a los protocolos.

El funcionario de carabineros **Marcelo Contreras** fue el encargado de tomar la denuncia del hecho 5. Su testimonio corrobora la existencia del hecho, la ubicación temporal y la reacción inicial de la víctima. En ese orden de ideas, ratificó el relato de Fernanda Alonso en su vivencia.

Por último, **Maximiliano Astorga**, funcionario de carabineros fue quien tomó la denuncia del hecho 2. Ratificó los elementos iniciales de la denuncia interpuesta por Sara Zamora, aportando solo consistencia cronológica y territorial a los hechos.

En el caso de la **prueba documental**, el boletín del SAPU Dr. Lucas Sierra respecto de Fernanda Alonso permitió constatar lesiones reales y catalogadas como leves, sufridas como consecuencia del uso de violencia en su contra.

El certificado de inscripción vehicular del vehículo PPU GGDT-32 que correspondía a un Hyundai gris del año 2014, de propiedad del padre del imputado. Fue un documento clave para confirmar el uso del vehículo en reiterados delitos por parte del acusado, toda vez que correspondía a las características aportadas por las afectadas.

Por último, el certificado de nacimiento del acusado acreditó el vínculo filial entre el imputado y el propietario del vehículo. Lo que reforzó de manera contundente la prueba indiciaria respecto del control y uso del móvil por parte

del imputado, quien por ser de su padre lo tenía su disposición y los indicios acerca de que el autor vivía en calle Urmeneta, tal como aparecía en el Registro Civil, en relación al dueño del automóvil en comento.

A modo de conclusión fue posible asentar que cada uno de los medios de prueba aportados fue valorado en su individualidad y resultó coherente con los elementos del tipo penal de robo con violencia o intimidación imputado en el presente caso. Existió, por tanto, plena correspondencia entre la prueba rendida e incorporada con los hechos acusatorios, satisfaciéndose los requisitos típicos, objetivos y subjetivos del delito en su modalidad reiterada, en lo que dice relación con los hechos N°s 1, 3, 4 y 5.

**Undécimo:** *Valoración conjunta de la prueba de cargo.* La valoración conjunta de las diversas probanzas rendidas en el juicio oral, a la luz de las reglas establecidas en los artículos 295 y 297 del Código Procesal Penal consistente en lo principal en las declaraciones de las víctimas y de las funcionarias policiales Rebolledo y Tapia permitió arribar a una convicción fundada acerca de la ocurrencia de los hechos investigados, la forma en que se desarrollaron y la participación del acusado en los mismos. Tanto las víctimas como las policías ofrecieron declaraciones claras, precisas, y altamente coincidentes en los aspectos relevantes de la dinámica delictiva.

Desde el punto de vista testimonial, las afectadas relataron con detalle y coherencia las circunstancias en que fueron abordadas, la violencia o intimidación a la que fueron sometidas, el uso de armas blancas, la intervención conjunta de un hombre y una mujer y del vehículo Hyundai gris como medio de transporte utilizado por los agresores. Esos testimonios fueron entregados de manera preliminar ante los funcionarios investigadores y, luego ratificados en juicio sin que presentaran contradicciones sustantivas. Además, cada víctima reconoció al acusado en distintas etapas, primero en sede investigativa en la respectiva diligencia de reconocimiento y, luego sindicado de manera asertiva y categórica en juicio.

Por su parte, las funcionarias de la Policía de Investigaciones que intervinieron en la investigación actuaron de manera rigurosa y aportaron una visión sistematizada de los hechos. Explicaron que, a través del relato de múltiples víctimas, lograron identificar patrones comunes, características del vehículo y una modalidad reiterada de comisión del delito. Rebolledo y Tapia entregaron una apreciación transversal de los distintos ataques, destacando que todos tenían como blanco a mujeres que transitaban solas en la vía pública, que los sujetos utilizaban la fuerza o amenazas para lograr quedarse con el botín, además se desplazaban en un vehículo pequeño de color gris, que más tarde fue identificado cuando las víctimas aportaron los datos de su placa patente, lo que les permitió vincular materialmente al acusado, ya que el automóvil se encontraba registrado a nombre de su padre.

De esta manera, la correlación y concordancia entre los dichos de las víctimas y los antecedentes aportados por la policía no solo fortaleció cada uno de los relatos por separado, sino que configuró un acervo probatorio armonioso, corroborado y robusto, puesto que no se trató de testimonios aislados o contradictorios, sino de declaraciones que se reforzaban entre ellas y que, al ser evaluadas conjuntamente, permitieron concluir con certeza la participación del acusado y la veracidad de los hechos imputados.

Dicha complementariedad entre la vivencia directa de las víctimas y la mirada investigativa de las policías permitió, además confirmar que los relatos no fueron influenciados o inducidos, sino que se originaron de una experiencia real de las afectadas, respecto de quienes fluyó durante el testimonio un correlato emocional acorde a la vivencia y fueron luego, sistematizados de manera técnica por los funcionarios encargados de esclarecer los hechos.

Así las cosas, se superó el estándar de prueba y se alcanzó un nivel de convicción, que excluyó toda duda razonable, conforme dispone el artículo 340 del Código Procesal Penal.

**Duodécimo:** *Estándar de prueba.* El estándar probatorio opera sobre la base de decidir fundadamente si, sobre la base de la prueba incorporada en el proceso penal, es posible o no justificar externamente la concurrencia de la hipótesis acusatoria o, si, por el contrario, dichos datos probatorios resultan insuficientes para satisfacer el estándar establecido por el legislador en el artículo 340 del Código Procesal Penal. En tal sentido, resulta pertinente traer a colación lo señalado por Ferrer Beltrán en cuanto al estándar de prueba en materia penal, quien señala que: "Para considerar probada la hipótesis de la culpabilidad deben darse conjuntamente las siguientes condiciones: 1) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas; y 2) Deben haberse refutado las hipótesis alternativas formuladas por la defensa, si son plausibles, explicativas de los mismos datos y que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc" (Ferrer, La valoración racional de la prueba, Editorial Marcial Pons, 2007, pp. 147-149).

**Décimo tercero:** *Hechos acreditados.* Que, en virtud de las pruebas reseñadas y valoradas en los considerandos precedentes, incorporada legalmente durante la audiencia, las que fueron apreciadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 295 y 297 del Código Procesal Penal, en concepto de este Tribunal reunieron el estándar necesario para dar por acreditado, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

Hecho 1: El día 4 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima Carolina Andrea Guzmán San Martín, se encontraba en la intersección de calle Francisco Cerda con Río Colorado, comuna de Recoleta, fue abordada por el imputado Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza junto a otro sujeto no identificado, procediendo ambos a intimidar a la víctima con un cuchillo, mientras le tiraban la cartera hasta que se cortaran los tirantes de ésta. Posteriormente, el imputado Llanillos Plaza, junto al otro sujeto desconocido, huyeron en el vehículo con las especies sustraídas en su poder.

Hecho 3: El día 13 de diciembre de 2016, a las 16:00 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima Valentina Antonia Guerrero Zúñiga se encontraba en la intersección de calle Bismuto con Dora, comuna de Recoleta, fue abordada por Camila Ignacia González Fuentealba y Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza, quienes descendieron de un vehículo, procediendo González Fuentealba a intimidar a la víctima con un cuchillo a la altura del estómago señalándole: "ya conchetumadre", mientras que, con la otra mano, tiraba el bolso que llevaba la víctima, hasta que logró cortar los tirantes y llevarse el bolso, que contenía el celular de la víctima, y documentos personales, valuados en \$330.000.-. Posteriormente, ambos imputados huyeron en el vehículo con las especies en su poder. Cabe señalar que mientras la imputada González Fuentealba intimidaba a la víctima, el imputado Llanillos Plaza prestó labores de cobertura en todo momento.

Hecho 4: El día 13 de diciembre de 2016, a las 19:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima Daniela Valeska Martínez Acuña, se encontraba en la intersección de calle Raúl Montt con Avenida Recoleta, comuna de Recoleta, fue abordada Camila Ignacia González Fuentealba y Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza, quienes descendieron de un vehículo, procediendo González Fuentealba a tirarle el bolso que traía la víctima, mientras comenzó a golpearla. A raíz de que la víctima no soltaba el bolso, el acusado Llanillos Plaza, tomó a la víctima por el pelo y le señaló: "quédate tranquila, loca", procediendo a ponerle un paño en la nariz a la víctima, cayendo al suelo y subiéndola al automóvil en el que se trasladaban, para posteriormente arrojar a la mujer del vehículo. Posteriormente, el acusado, junto con González Fuentealba huyeron en el vehículo con las especies en su poder.

Hecho 5: El día 13 de diciembre de 2016, a las 21:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima Fernanda Del Carmen Alonso Millavil, se encontraba caminando por calle Dorsal, comuna de Recoleta, fue abordada por el imputado Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza, quien descendió de un vehículo y le manifestó: "esta wea la vamos a hacer súper corta", por lo que la víctima salió corriendo, momento en cual es alcanzada por el imputado, quien la empujó y la botó al suelo, tomando el bolso que traía la víctima en su hombro, comenzando a arrastrarla por el suelo, hasta quitarle el bolso, resultando la víctima con lesiones leves. Posteriormente, el sujeto se subió al vehículo y huyó del lugar con la especie en su poder.

**Décimo catorce:** *Ejercicio de subsunción de los hechos acreditados.* Que los hechos que se han dado por acreditados, más allá de toda duda razonable, en el considerando décimo tercero, importa para este Tribunal la calificación jurídica del delito consumado de robo con violencia e intimidación, previsto en el artículo 436, inciso primero, en relación con lo dispuesto en los artículos 432 y 439 del Código Penal, por cuanto, se acreditó en el juicio oral, que el acusado Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza en compañía de otros sujetos, *interceptaron a las víctimas* Carolina Andrea Guzmán San Martín, Valentina Antonia Guerrero Zúñiga, Daniela Valeska Martínez Acuña y Fernanda del Carmen Alonso Millavil, quienes transitaban solas por la vía pública, situación que aprovechó el hechor y con el fin de sustraer sus pertenencias, procedió a agredir a las víctimas con golpes de pies y puños mientras registraban sus pertenencias o en otros casos a intimidarlas con un cuchillo de grandes dimensiones logrando así la apropiación de las carteras o bolsos de su propiedad, que portaban consigo e incluso dejándolas en algunos casos lesionadas y, en el suelo para huir del lugar en el vehículo que llegó hasta el sitio del suceso.

Producto de la violencia sufrida, las víctimas Daniela Valeska Martínez Acuña y Fernanda del Carmen Alonso Millavil, en juicio dieron cuenta de las lesiones que les provocaron y, en su caso, Carolina Andrea Guzmán San Martín y Valentina Antonia Guerrero Zúñiga refirieron de manera detallada las amenazas de ser heridas con el arma blanca con la cual fueron intimidadas.

Lo anterior implica el conocimiento por parte del acusado de todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo que describen la conducta típica, de manera que en la especie fue posible colegir que el acusado conocía el riesgo jurídicamente relevante inherente al comportamiento típico, concurriendo, de esta forma, dolo como forma de atribución subjetiva de responsabilidad penal, conculcándose con ello, los bienes jurídicos protegidos por la norma penal, consistentes en la propiedad, la libertad y la salud individual de la respectiva víctima.

A la luz de los presupuestos fácticos no controvertidos y las probanzas rendidas durante el juicio, corresponde analizar su adecuación al tipo penal de robo con violencia y/o intimidación, conforme a lo dispuesto en los artículos 432 y siguientes del Código Penal, particularmente bajo los elementos esenciales identificados doctrinaria y jurisprudencialmente para su configuración.

**Apropiación:** En todos los hechos imputados se acreditó la sustracción de bolsos, carteras y efectos personales directamente desde la esfera de resguardo de las víctimas. La apropiación fue ejecutada de forma inmediata y sin interrupción entre la violencia ejercida y la sustracción, lo cual satisface el requisito típico de apoderamiento. Las víctimas Valentina Guerrero, Daniela Martínez, Carolina Guzmán y Fernanda Alonso relataron de forma coherente y consistente cómo les arrebataron sus pertenencias durante un forcejeo o tras una agresión directa. En todos los casos, el imputado huyó con las especies en su poder.

**Naturaleza mueble de la especie:** Las especies sustraídas (bolsos, carteras, teléfonos celulares, billeteras, documentos personales, dinero en efectivo, entre otros) corresponden a bienes muebles en los términos del artículo

567 del Código Civil, toda vez que son susceptibles de ser transportados de un lugar a otro por fuerza externa. Este elemento fue detallado por cada víctima al enumerar los objetos sustraídos.

Cosa ajena: Las pertenencias robadas pertenecían o estaban en legítima posesión de las víctimas o afectadas, situación no controvertida ni por el acusado ni por la defensa. La ajenidad se desprende de los relatos de las víctimas y el hecho de que los objetos eran llevados consigo por ellas, sin vínculo de dominio o posesión con el hechor.

Falta de voluntad: En todos los casos, el apoderamiento ocurrió sin consentimiento y de manera intimidatoria y violenta, configurando una sustracción contra la voluntad de las víctimas. Por el contrario, ninguna de las víctimas dio cuenta de haber entregado voluntariamente sus pertenencias.

Ánimo de lucro: El móvil de lucro se colige de la acción misma de apoderarse de las pertenencias y huir con ellas. No es necesario que se acredite el uso posterior de las especies, bastando que se haya actuado con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial. El que se desprende de la fungibilidad de los bienes.

Violencia y/o intimidación en las personas: Todos los hechos incluyeron, ya sea el uso de violencia física —empujones, golpes, forcejeos, o arrastre por el suelo—o, intimidación, ya que el agente actuó premunido de un cuchillo de grandes dimensiones que afectó de manera elocuente el debilitamiento de la voluntad de la ofendida, lo cual se encuadra plenamente en la definición del artículo 439 del Código Penal al describir las tres hipótesis consistentes en obtener la entrega o manifestación de las cosas, o a impedir la resistencia u oposición a que se quiten o, cual acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega. Es así, como las víctimas relataron agresiones directas y uso de amenazas verbales (como en el caso de Daniela Martínez y Fernanda Alonso), así como lesiones constatadas médicamente, como las sufridas por Fernanda Alonso.

Conclusión: Todos los elementos del tipo penal de robo con violencia o intimidación se encuentran satisfechos en los hechos acreditados. El accionar del acusado, en coordinación con su coimputada, presenta una reiteración sistemática del mismo patrón delictivo, afectando de forma simultánea los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal: la propiedad de las víctimas y su integridad física o psíquica. Por lo tanto, la adecuación típica resulta plenamente procedente respecto de los hechos imputados bajo los numerales 1, 3, 4 y 5.

**Décimo quinto: Autoría y participación.** El desarrollo del juicio oral permitió estructurar una línea probatoria sólida y coherente que, que ordenada cronológicamente, establece de forma fundada la participación penalmente relevante del acusado Llanillos Plaza en cuatro de los cinco hechos imputados. A través del testimonio de las víctimas, la labor investigativa de funcionarios policiales, la prueba documental y la declaración del propio acusado, se configura una narrativa convergente que permite atribuirle responsabilidad en calidad de autor.

El primer hecho, ocurrido el 4 de diciembre de 2016 y, fue relatado por la víctima Carolina Guzmán, quien señaló que fue abordada por dos sujetos, uno de los cuales la intimidó con un cuchillo de grandes dimensiones, mientras el otro le arrancaba su cartera. Describió el vehículo gris con huinchas de embalaje en el vidrio trasero y reconoció sin vacilaciones al acusado, tanto en el reconocimiento fotográfico como en sala. Este testimonio, directo y consistente, no fue contradicho y se vio reforzado por la coincidencia con las características físicas del acusado y con la identificación del vehículo en los siguientes hechos. Por lo demás, hizo fuerza la explicación que dio acerca del por qué recordaba tan bien la cara del sujeto que la intimidó, ya que al transitar con su hija, después de misa, por la vía pública pensó que querían secuestrar a su hija y por lo mismo no paraba de mirar el rostro del hechor y de proteger a su hija arrinconándola contra una reja para evitar que se la llevaran. También aportó otro antecedente que permitió dar crédito a las razones por las que se fijó en el agente y esto era que siendo un día caluroso llevaba un polerón enrollado en el

cuello. Y, por último, afirmó que con posterioridad a los hechos acudió junto a su marido a comer completos a un local y que frente al negocio estaba el vehículo que participó en el robo y que como vio a un partícipe en el interior del negocio se marchó.

El 13 de diciembre de 2016 se produjeron tres hechos con pocas horas de diferencia, todos en un mismo sector de la comuna de Recoleta. A las 16:00 horas, Valentina Guerrero fue interceptada por una mujer que la amenazó con un cuchillo. Ante su resistencia, intervino un hombre que completó la sustracción. Valentina reconoció al acusado en fotografías y en juicio. Detalló que el vehículo tenía la patente GGDT-32, ya que el día de los hechos logró memorizar la patente del vehículo en comento y, que posteriormente debido a las diligencias investigativas se estableció que en el Registro de Vehículos Motorizados dicha patente aparecía registrada a nombre del padre del acusado. Su testimonio no presentó contradicciones, y fue reforzado por la diligencia de reconocimiento realizado por la PDI.

Ese mismo día, alrededor de las 19:30 horas, Daniela Martínez fue interceptada al regresar de una farmacia. Describió cómo fue atacada por una mujer y, luego por un hombre, sindicando al acusado, como el sujeto que la tomó del cabello, le puso un paño en la cara y la subió por la fuerza a un automóvil. La víctima fue lanzada en movimiento del vehículo y, luego constató lesiones compatibles con su relato. Su testimonio fue seguro y sin vacilaciones, unido al reconocimiento del acusado en sala. Reforzó la fiabilidad de su sindicación la referencia que hizo a lo que le aconteció a su madre, quien mientras iba a bordo de un taxi colectivo “pirata” el chofer le contó del asalto a una mujer y su madre le informó que se trataba de ella. Frente a esa información el colectivero le proporcionó los datos y domicilios de los que “andaban haciendo”. Dato que a posteriori, según fue avanzando la investigación resultó relevante y determinante para ubicar a los hechores, entre ellos, el acusado. Además, también participó en una diligencia de reconocimiento que fue exitosa para establecer la autoría del acusado en estos hechos.

Aproximadamente a las 21:30 horas, la víctima Fernanda Alonso fue interceptada en calle Dorsal. Fue empujada al suelo, arrastrada y despojada de su bolso por un sujeto que descendió de un vehículo pequeño y de color gris y, aunque durante el reconocimiento fotográfico expresó mantener ciertas dudas, en juicio reconoció al acusado como el autor de la agresión y sustracción sufrida el día de los hechos. Describió el vehículo con detalle —pequeño de color gris con un vidrio cubierto— y relató lesiones físicas que, luego constató en el SAPU. Si bien su testimonio tuvo matices, fue ratificado por la atención médica y las coincidencias contextuales aportadas por testigos como María Eliana González, quien lo identificó como sujeto habitual de ese tipo de delitos. Cabe recordar que contó que al revelar lo sucedido a su vecina con su marido, ellos le pidieron datos de la persona, entonces le dijeron que era de nombre Jeffrey y muy conocido en el sector. Por último, señaló que anotó la placa patente del vehículo en un papel, pero que con los nervios no la encontró hasta días después cuando haciendo aseo lo encontró.

Paralelamente, la comisaria Jessica Rebolledo de la PDI declaró que todas las víctimas, salvo Sara Zamora, realizaron reconocimientos positivos del acusado. Junto a la comisaria Jessica Tapia y la jefa de análisis Ilenia Cortés, describieron una serie de empadronamientos, declaraciones de vecinos y análisis del patrón delictivo, que permitieron asociar al acusado con los hechos. Se destacó la reiteración del modus operandi: mujeres solas, que transitaban por la vía pública, lo que las hacía víctimas vulnerables unido a lo violento o amenazante de los ataques, quien huía en un vehículo pequeño de color gris que tenía una abolladura y, que más tarde fue identificado como un Hyundai i10 con la PPU GGDT-32. Esta patente fue mencionada por al menos dos víctimas y, luego al verificar en los registros del Servicio



de Registro Civil, se pudo establecer que el padre del acusado era el dueño, motivo por el cual tenía acceso a su uso. Por lo demás, el propio imputado admitió que utilizaba dicho vehículo.

Respecto de la investigación y el análisis de los antecedentes que se fueron recopilando, las policías entregaron un testimonio de carácter técnico y metodológico que complementó y contextualizó lo expuesto por las víctimas. En ese orden de ideas, las comisarias Jessica Rebolledo, Jessica Tapia e Ilenia Cortés dieron cuenta de un patrón reiterado de conducta: una serie de delitos cometidos en un mismo cuadrante territorial, entre los días 4 y 13 de diciembre de 2016, mediante el uso de un vehículo Hyundai color gris, patente GGDT-32, que presentaba daños en su parte trasera y un vidrio cubierto por cinta. Este vehículo fue descrito de forma coincidente por al menos tres víctimas y está registrado, según consta documentalmente, a nombre del padre del acusado. Además, el propio acusado reconoció conocer y haber utilizado dicho automóvil.

A su vez, los reconocimientos realizados por las víctimas, sumados a la descripción física del atacante, la secuencia de los hechos, el uso de armas blancas y la violencia ejercida fueron consistentes entre sí, considerando que, además se trató de víctimas que no se conocían entre ellas. Y de este modo, reforzaron la robusta incriminación del imputado en los hechos por los cuales se dictó veredicto condenatorio.

Sumado a los funcionarios policiales que señalaron que, a través de empadronamientos vecinales, se obtuvo información que vinculaba al acusado con los delitos investigados, quienes explicaron que si bien algunos vecinos se abstuvieron de declarar formalmente por temor, los datos aportados permitieron individualizar tanto al acusado como a su acompañante femenina. Esta información, sistematizada por la unidad de análisis de la PDI, resultó esencial para vincular al acusado con la reiteración delictiva bajo el mismo modus operandi, reforzando así su participación no solo desde el plano fáctico, sino también desde la línea investigativa de los hechos.

A mayor abundamiento, durante el juicio, el acusado optó por renunciar a su derecho a guardar silencio y declarar. En dicha ocasión, reconoció su presencia en algunos de los hechos y admitió que actuaba como conductor o “asegurador”. Aunque buscó minimizar su rol, este reconocimiento configura una colaboración que, en lo medular, ratificó la línea investigativa del Ministerio Público y la sindicación de las víctimas. Lo que reforzó la fiabilidad de la sindicación, toda vez, que el acusado reconoció que los hechos por los cuales estaba siendo juzgado ocurrieron efectivamente, señalando que sería una mentira decir que no los cometió. Justificó su actuar aludiendo a un momento personal provocado por el fallecimiento de su madre, lo que según explicó, lo llevó a involucrarse en el consumo de alcohol y drogas, y a cometer “muchas cosas” que él mismo calificó como errores. Asimismo, admitió que los hechos sucedieron en la comuna de Recoleta y que todos ocurrieron el mismo día, con algunas horas de diferencia, sin poder recordar con precisión las calles específicas.

Un punto especialmente relevante de su testimonio fue la mención a los vehículos utilizados. El acusado señaló que su padre era propietario de un automóvil Hyundai color gris y de un Suzuki rojo, y reconoció que él mismo podía haber estado presente en algunos de los hechos conduciendo uno de esos vehículos. Este reconocimiento unido al contenido de la prueba documental, particularmente con el certificado de inscripción del vehículo Hyundai PPU GGDT-32, a nombre de su padre, el mismo que fue descrito por múltiples víctimas y vinculado reiteradamente a la ejecución de los delitos conllevó a destruir la presunción de inocencia que operaba en su favor.

En cuanto al rol que desempeñó en la comisión de los ilícitos, el acusado señaló que su función era “hacer la seguridad”, lo que en sus propias palabras significaba mantenerse dentro del vehículo mientras otros ejecutaban los robos. Esta afirmación no lo desvincula de los hechos, sino que confirma una participación previa y coordinada, propia

de un autor conforme al artículo 15 N°3 del Código Penal. Si bien negó haber utilizado armas blancas o haber ejercido violencia directa sobre las víctimas y, también descartó haber participado en el uso de un paño o haber tomado del cabello a alguna persona, sus dichos no resultan suficientes para excluirlo del ámbito de responsabilidad penal, considerando que su propio relato confirma que formaba parte del equipo que cometió los ilícitos, cumpliendo un rol logístico esencial, toda vez, que el vehículo utilizado permitió su comisión, ya que gracias a él abordaban a las víctimas en la vía pública y, luego de perpetrado el hecho huían raudamente en el mismo automóvil. Sin que deba perderse de vista, que en los hechos N°s 1, 2 y 5 participó de manera directa al ejecutar la conducta típica del hecho imputado.

De tal manera, las probanzas analizadas precedentemente formaron convicción suficiente en este Tribunal y permitieron dar por acreditado, más allá de toda duda razonable, que al acusado **Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza** le ha cabido participación en calidad de autor de los hechos por los cuales se emitió veredicto condenatorio a su respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N°1 y 3 del Código Penal.

**Décimo sexto:** *Iter criminis o grado de desarrollo del delito.* Que, habiendo el acusado en compañía de otros sujetos, logrado, mediante el uso de la violencia e intimidación, sustraer especies muebles de propiedad de cuatro víctimas, consistente en su bolso o cartera, respecto de las ofendidas Guzmán San Martín y Guerrero Zúñiga y en cuanto a las afectadas Martínez Acuña y Alonso Millavil fueron agredidas e inclusive arrastradas por el suelo con el fin de apoderarse de sus bolsos. Así las cosas, es posible apreciar, la violencia física y las amenazas con elementos cortantes que vivenciaron las víctimas al momento de ser despojadas de sus bienes, quienes en el primer caso resultaron con lesiones leves, y en el segundo caso bajo amenazas coercitivas acompañadas de elementos cortopunzantes, siempre puestas al servicio de la apropiación, lo que se desprende no solo del hecho de haber forcejeado el acusado y otros con las víctimas, sino que también de las expresiones vertidas durante la ejecución del hecho tales como “quédate tranquila loca o esta wea la vamos a hacer súper corta”.

Habiendo el acusado logrado respecto de todas y cada una de las víctimas obtener sin su consentimiento ya sea su bolso o su cartera, estas especies salieron de la esfera de resguardo de sus dueñas y el imputado logró constituir una nueva esfera de resguardo, tras haberse dado a la fuga con las especies en su poder, sin que fueran recuperadas por las ofendidas, entonces no cabe sino concluir, que en la especie los delitos de robo con violencia e intimidación se encuentran consumados.

**Décimo séptimo:** *Audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. Solicitudes de los intervinientes.* En lo referente a las circunstancias que modifican la responsabilidad criminal, el Ministerio Público incorporó el extracto de filiación y antecedentes del acusado, afirmando que sostenía su pretensión punitiva conforme a lo acreditados en juicio, siendo condenado por 4 delitos se configuraba la reiteración. Solicitó al tribunal que se rechazara la alegación de la defensa relativa a la media prescripción. Argumentó que, en la especie, no se cumplían los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para acceder a dicho beneficio, ya que el plazo de prescripción no sólo no se había completado, sino que había sido interrumpido conforme a la normativa vigente. Fundamentó su posición señalando que, de acuerdo con el artículo 95 del Código Penal, el cómputo del plazo de prescripción comienza desde la comisión del delito. No obstante, agregó que dicha regla general se encuentra sujeta a las modificaciones que introducen los artículos 96 y siguientes del mismo cuerpo legal, especialmente en lo relativo a la interrupción y suspensión de dicho cómputo. En ese sentido, indicó que el artículo 96 establece que la prescripción se interrumpe cuando el imputado comete nuevos delitos, y se suspende cuando se dirige el procedimiento en su contra. En ambos casos, el tiempo transcurrido anteriormente no produce efecto, y el cómputo debe reiniciarse. Sobre esa base, el Ministerio Público sostuvo que la

defensa incurría en un error conceptual al pretender aplicar el artículo 103 del Código Penal de manera aislada, sin considerar previamente los efectos que generan las reglas generales sobre prescripción. Reiteró que la media prescripción no es una figura autónoma ni independiente, sino que se encuentra sujeta al mismo régimen de cómputo, interrupción y suspensión que la prescripción total. Agregó que el artículo 99 del Código Penal refuerza esta tesis al señalar expresamente que las causas de interrupción y suspensión deben considerarse antes de declarar cumplido el plazo de prescripción. Desde esa lógica, resulta improcedente aplicar el artículo 103 si previamente se ha acreditado la interrupción del cómputo por la comisión de nuevos delitos o por la existencia de actuaciones judiciales válidas dirigidas en contra del acusado. Conforme a lo anterior, el Ministerio Público concluyó que el beneficio de la media prescripción no resultaba procedente en la presente causa, ya que el acusado había sido condenado por otros delitos con posterioridad al hecho imputado, y además existía un procedimiento penal formalmente dirigido en su contra desde fechas anteriores, lo que, en conjunto, configuraba causal de interrupción y suspensión del plazo. Por ello, solicitó expresamente al tribunal que se rechazara la pretensión de la defensa en ese aspecto. Además indicó que los 15 años que solicitaba eran proporcionales a la cantidad de delitos por los cuales se emitió veredicto condenatorio y la extensión del mal causado, dada las declaraciones de las víctimas. Se opuso al reconocimiento del 11 N°9 del Código Penal. En cuanto a la media prescripción se oponía ya que operaba la interrupción, toda vez que posee una condena posterior a los hechos y acompañó extracto de filiación en el que constan tres condenas. La primera condena es del 2018 poco menos de 2 años de ocurridos los hechos por los que fue condenado en este juicio.

A su turno, la Defensa solicitó al tribunal tener por reproducida la argumentación previamente expuesta respecto de la media prescripción, por razones de economía procesal. Señaló su desacuerdo con la postura del Ministerio Público, fundamentando que, a su juicio, el artículo 103 del Código Penal sólo exige como requisito el transcurso del tiempo, sin que le sean aplicables las reglas de interrupción y suspensión contenidas en los artículos anteriores del mismo cuerpo legal. Explicó que dichas reglas dicen relación con la prescripción general de la acción penal, mientras que el artículo 103 regula la media prescripción, la cual constituye una institución distinta y autónoma, configurando un beneficio especial en favor del acusado. Indicó que esta era la tesis que sostenía la defensa y que ha sido, además, recogida en fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel y de la Corte Suprema en el año 2018, en los mismos términos defendidos por su parte. En ese sentido, afirmó que la regla del artículo 103 no contiene mención alguna a la interrupción ni a la suspensión de la prescripción, y por tanto, debe entenderse como una disposición especial en beneficio del acusado, no sujeta a los requisitos más restrictivos del régimen general. A mayor abundamiento, invocó el principio del *in dubio pro reo*, solicitando que ante cualquier duda interpretativa se resolviera en favor de su representado. Por otra parte, la defensa pidió al tribunal que se tuviera por acreditada la circunstancia atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, ya que su representado renunció expresamente a su derecho a guardar silencio, prestó declaración durante el juicio y colaboró de forma sustancial al esclarecimiento de los hechos, reconociendo su participación en los delitos materia de acusación. En cuanto a su petición principal de pena, solicitó que se impusiera a su representado una condena de cuatro años de presidio, la cual —en atención al cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.216— pudiera ser sustituida por la pena de libertad vigilada intensiva. Fundó dicha solicitud en un informe pericial social elaborado por el trabajador social don Danilo Pino, encargado por la propia defensa. Finalmente, la defensa solicitó, en subsidio, la imposición de una pena única de cinco años y un día de presidio, reiterando como petición principal la aplicación de una pena de cuatro años con sustitución por libertad vigilada intensiva y el reconocimiento de la media prescripción.

**Décimo octavo:** *Elementos probatorios.* El Ministerio Público, a través de la lectura resumida incorporó, los siguientes documentos: Extracto de Filiación y Antecedentes del acusado, en el cual se registran las siguientes condenas:

Rit 2233-2017 con fecha 12 de febrero de 2018 por el 3er Juzgado de Garantía de Santiago a la pena de 61 días como autor del delito de maltrato a carabineros cumplida 12 de noviembre de 2024. La fecha de la sentencia es 12 de febrero de 2018 y los hechos ocurrieron el 28 de marzo de 2017. La forma de cumplimiento fue efectiva. Certificado de ejecutoria 23 de febrero de 2018. Resolución de 12 de noviembre de 2024 que tiene por cumplida la condena.

Condena del mismo tribunal en causa rit 7109-2017 condenado con fecha 2 de abril de 2018 como autor del delito de porte arma blanca consumo a una multa de 1/3 de UTM pagada el 30 de abril de 2018. Certificado de ejecutoria de la misma fecha de la sentencia.

Además, una tercera condena en causa rit 2214-2023 del Juzgado de garantía de Puerto Montt 17 de octubre de 2023 fue condenado como autor de apropiación indebida a una multa de 1 UTM y 61 días de prisión y se le remitió la pena. Certificado de ejecutoria de 18 de octubre de 2023.

Por su parte la defensa incorporó el peritaje social evacuado por Danilo Pino, evacuado en el año 2024, quien indicó que el objetivo del peritaje fue conocer la realidad social, familiar y económica del acusado, así como evaluar su nivel de arraigo y la viabilidad de una pena sustitutiva. Destacó que el acusado mantenía un fuerte arraigo familiar, convivía con su esposa desde hacía 17 años —quien lo acompañó diariamente durante el juicio—, y que había iniciado un proceso sostenido de abstinencia de consumo de drogas desde hacía más de cuatro años, adoptando un rol funcional como jefe de hogar y padre. Agregó que los hechos por los cuales fue acusado correspondían a un período anterior, en el cual su representado presentaba un consumo problemático de sustancias y conductas de riesgo asociadas a dicha situación de salud mental. En la parte conclusiva del informe indicó que el acusado contaba con una red familiar significativa, lo cual operaba como factor protector para una reinserción efectiva en el medio libre. El perito sostuvo que el acusado había reconocido su responsabilidad, mostraba arrepentimiento y disponía de condiciones familiares y personales favorables para llevar a cabo un tratamiento exitoso fuera del medio carcelario.

**Décimo noveno:** *Pronunciamiento sobre las modificatorias.* Que, la Defensa del acusado solicitó se acogiera a su favor la atenuante contemplada en el N°9 del artículo 11 del Código Penal, oponiéndose a ello el Ministerio Público, argumentando que los dichos del acusado en nada aportaron al esclarecimiento de los hechos, es más, que si el Tribunal suprimía hipotéticamente su declaración igual hubiera arribado a una decisión condenatoria a su respecto, atendida la contundencia de la prueba incorporada y la consistencia de la misma.

Ahora bien, en lo que dice relación con dicha minorante, cabe señalar que esta atenuante fue introducida en el Código Penal en reemplazo de la confesión espontánea, la cual no se ajustaba con el espíritu del nuevo Código Procesal Penal. En tal sentido, cabe destacar que dentro de las garantías reconocidas a todo imputado, se encuentra la de guardar silencio, reforzándolo con la concepción que su declaración constituye un medio de defensa. Por su parte, la colaboración puede estar encaminada tanto al “esclarecimiento” del hecho punible propiamente tal, como a la intervención que en él ha tenido el sujeto u otras personas. A su vez, la contribución puede efectuarse no sólo ante el tribunal sino, además, ante otras autoridades encargadas de la investigación. Ahora bien, la colaboración ha de ser *sustancial*, esto es, no debe limitarse a proporcionar detalles intrascendentes sino constituir un aporte efectivo y serio al éxito de la investigación, ya sea también en cuanto a ratificar líneas de investigación, es por ello que se trata de una labor privativa del Tribunal, que en definitiva, debe considerar los elementos a fin de reconocer esta atenuante, a saber:

que, el imputado haya renunciado a su derecho a guardar silencio, proporcionando toda la información que tenía, reconociendo su participación y, que, la declaración del mismo sea decisiva en el esclarecimiento de los hechos y, su posterior calificación jurídica. Así las cosas, para acreditar dicha atenuante, estos sentenciadores deberán atenerse al menos a tres criterios, esto es, la entrega de antecedentes relevantes por parte del acusado; la aceleración de tiempos y, una mayor contribución al grado de convicción, en la decisión adoptada por el Tribunal.

En el presente caso, el acusado informó al Tribunal acerca de los móviles de su actuar, esto es, el fallecimiento de su madre, lo que le habría causado graves problemas de adicción a tal punto que señaló que perdió la “mente” y reconoció los hechos que se le imputaban en el libelo acusatorio, sin encontrarse en condiciones si quiera de dar cuenta de la fecha de su muerte, y por lo mismo no aportó detalles de consideración, sin embargo enfatizó que negar la acusación sería mentir. Además, reconoció que al momento de la comisión de los hechos transitaba en un vehículo, que estaba a nombre su padre y, a raíz que al menos tres víctimas aportaron sus particularidades como que era pequeño de color gris y tenía un abollón, además de los datos de la patente, e inclusive una de ellas sostuvo que la marca del automóvil empezaba con la letra “H”, es que esta sala llegó a establecer más allá de toda duda razonable que era el autor de cuatro de los hechos por los cuales se le acusó, ratificando así la prueba de cargo presentada por el titular de la acción penal, contribuyendo a la destrucción de la presunción de inocencia que operaba a su favor, fundamentos que permiten acoger la atenuante en comento.

**Vigésimo: Alegación de la media prescripción.** Sobre la prescripción y su interrupción en la presente causa, en primer lugar, el artículo 95 del Código Penal establece que el plazo de prescripción de la acción penal comienza a contarse desde el día en que se hubiere cometido el delito. Sin embargo, esta regla general no puede entenderse de manera aislada, ya que el propio legislador, en el artículo 96 del mismo cuerpo legal, regula expresamente los supuestos que interrumpen y suspenden dicho cómputo. En lo pertinente, el artículo 96 dispone que la prescripción se interrumpe —perdiéndose todo el tiempo anteriormente transcurrido— cuando el delincuente comete un nuevo crimen o simple delito. Asimismo, señala que la prescripción se suspende desde el momento en que el procedimiento se dirige en su contra, y que si dicho procedimiento se paraliza por más de tres años o termina sin condena, el plazo continúa como si no se hubiera interrumpido.

Ahora bien, aplicado lo anterior al caso concreto, si bien el hecho por el cual se ha formulado acusación ocurrió en diciembre del año 2016, consta en la presente causa que con posterioridad a esa fecha el acusado fue condenado en otras causas penales, por hechos que revisten el carácter de crimen o simple delito, e incluso ingresó a cumplir efectivamente las penas impuestas.

De acuerdo al certificado de viajes de fecha 01 de agosto de 2024 emitido por Policía de Investigaciones Departamento de Migraciones N°45384, firmado por Carlos González Gutiérrez, Asistente Administrativo G°13 Departamento de Migraciones, quedó acreditado que el imputado no registraba movimientos migratorios por pasos fronterizos habilitados desde el 01 de enero de 2016 a la fecha.

Y, segundo, que fue formalizado en la presente causa el 23 de septiembre de 2022, según el certificado del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de fecha veinte de noviembre de dos mil veinticuatro incorporado por la defensa, sin que exista querrela en su contra.

Sin embargo, consta en su extracto de filiación que en el rit 2233-2017 con fecha 12 de febrero de 2018 el 3er Juzgado de Garantía de Santiago lo condeno a la pena de 61 días como autor del delito de maltrato de obra a carabineros, pena cumplida 12 de noviembre de 2024. Se incorporó dicho fallo en que consta la fecha de ocurrencia de

los hechos, a saber, el 28 de marzo de 2017, por lo que sin duda el ilícito lo cometió con posterioridad a los hechos en que se le juzga. Además, la forma de cumplimiento fue efectiva. También mantiene una condena del mismo tribunal en causa rit 7109-2017 con fecha 2 de abril de 2018 como autor del delito consumado de porte arma blanca, sentencia en la que fue condenado a una multa de 1/3 de UTM pagada el 30 de abril de 2018. Y, una tercera condena en causa rit 2214-2023 del Juzgado de Garantía de Puerto Montt de acuerdo con la cual el 17 de octubre de 2023 fue condenado como autor de apropiación indebida a una multa de 1 UTM y 61 días de prisión y se le remitió la pena. Por lo que dichos antecedentes debidamente certificados resultan suficientes, conforme al artículo 96, para interrumpir el curso de la prescripción, reiniciándose el cómputo desde cero.

Desde esta perspectiva, resulta improcedente sostener que se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 103 del Código Penal para declarar la extinción de la acción penal por prescripción. Tal disposición exige que haya transcurrido, al menos, la mitad del tiempo requerido para la prescripción total; sin embargo, ello presupone que no haya operado previamente ninguna causal de interrupción o suspensión conforme a las reglas ya señaladas.

Respecto de este punto, es preciso realizar una interpretación sistemática del Código Penal. El artículo 99, que precede lógicamente al artículo 103 y, establece que toda suspensión o interrupción debe considerarse antes de declarar cumplida la prescripción. Esta disposición refuerza la necesidad de analizar, en primer término, si concurre alguna causal que afecte el cómputo del plazo, antes de examinar si se ha satisfecho la exigencia temporal que habilita la extinción de la acción penal. En consecuencia, verificado que el acusado cometió nuevos delitos con posterioridad al hecho investigado en la presente causa —lo que interrumpió el plazo de prescripción—, no corresponde estimar que se haya cumplido el presupuesto del artículo 103 del Código Penal. Por tanto, la acción penal se mantiene vigente y plenamente exigible.

**Vigésimo primero:** *Regulación de la pena.* Que, el inciso primero del artículo 436 del Código Penal, castiga el delito de robo con intimidación y/o violencia con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, esto es, de cinco años y un día a veinte años.

Y teniendo presente que:

1º Se le condenó en calidad de autor de cuatro delitos de robo con intimidación y/o violencia;

2º Además, se determinó en todos ellos que el iter criminis era consumado;

3º Que la pena del delito consta de tres grados y; en la especie, concurriendo solo una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, a saber, la minorante de colaboración sustancial en todos ellos, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 68 del código punitivo el Tribunal no podrá aplicar el grado máximo y;

4º En atención a la extensión del mal causado, tal como pudo apreciar esta sala, que pese a todo el tiempo transcurrido las víctimas no habían olvidado de los padecimientos que sufrieron el día de los hechos, una de ellas pensó que iban a secuestrar a su hija de tan solo 10 años y pese a que la intimidaban con un cuchillo de grandes dimensiones siguió oponiéndose, ya que nunca pensó que la querían asaltar, venía saliendo de una iglesia, otra profesional de la salud quedó mareada de tantos golpes que le propinaron en la cabeza unido al paño que le colocaron en su boca con un líquido que provocó que quedara en pésimas condiciones, tanto así que no sabía cómo la subieron arriba del auto del que después la botaron a la calle. A lo anterior, cabe sumar que ninguna de las afectadas recuperó sus especies, por lo mismo de acuerdo al principio de proporcionalidad de las penas no se justifica imponer una pena en el mínimo por cada uno de los delitos que se le condenó; sin embargo, atendido que aparece más favorable aplicar el artículo 351 del Código Procesal Penal, ya que dicha norma contiene un método de acumulación jurídica, que tiene

por objeto morigerar la exasperación de las penas, conforme al principio de humanidad y proporcionalidad de las mismas, en casos como el que nos ocupa, toda vez que nos encontramos ante una reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, porque en cada uno de los delitos que el tribunal tuvo por establecido el bien jurídico penalmente tutelado es la propiedad e integridad física de las personas. Por lo tanto, las cuatro infracciones, serán estimadas como un solo delito, es decir, considerando las circunstancias modificatorias aplicables, en este caso la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, con lo cual la sanción a considerar en este paso es la pena de presidio mayor en su grado mínimo, decidiendo el tribunal a continuación, aumentarla en un grado, con lo cual la sanción a imponer corresponderá a la de presidio mayor en su grado medio, tal como se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

Atendida la pena aplicar no resulta necesario hacerse cargo del informe social incorporado en su oportunidad por la defensa.

**Vigésimo segundo:** *Forma de cumplimiento.* Que no se concederá al sentenciado Llanillos Plaza, ninguna pena sustitutiva al cumplimiento de la pena privativa de libertad a imponer por no concurrir a su respecto los requisitos exigidos por la Ley N°18.216 para su reconocimiento y aplicación, toda vez que la pena a aplicar excederá de cinco años.

**Vigésimo tercero:** *Costas.* Que, en atención a que el acusado fue defendido por una abogada de la Defensoría Penal Pública, considerando de que no fue vencido totalmente, lo eximirá del pago de las costas de la causa, tal como se dirá en lo resolutivo del presente fallo. También se le eximirá del pago de las costas del juicio al Ministerio Público por el Hecho N°2, considerando que tuvo motivos más que suficientes para traer dicha imputación a juicio oral.

**Vigésimo cuarto:** *Huellas genéticas* Que, conforme dispone el artículo 17 de la Ley N°19.970, en relación con el artículo 40 del Reglamento, se ordena la determinación de la huella genética del sentenciado Llanillos Plaza incluyéndose la misma, una vez ejecutoriada la presente sentencia, en el Sistema Nacional de Registro de Condenados.

**Vigésimo quinto:** *Registro Electoral.* Asimismo, en su oportunidad, respecto del condenado Castillo Ramírez, dese cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de la Ley N°20.568, oficiándose al Servicio Electoral.

**Vigésimo sexto:** *Absolución por el Hecho N°2 por falta de participación.* Conforme al principio de presunción de inocencia y al estándar probatorio aplicable en materia penal —esto es, más allá de toda duda razonable—, el tribunal ha valorado de forma crítica y razonada la prueba rendida respecto del hecho N°2, atribuido por el Ministerio Público al acusado Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza y, ha llegado a la convicción de que no resulta jurídicamente posible dictar una sentencia condenatoria fundada en prueba suficiente y concluyente.

Debe tenerse presente que el libelo acusatorio describió como presupuesto fáctico que el 13 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 10:00 horas, la víctima Sara Elvira Zamora Rivera fue abordada en la vía pública por Camila González Fuentealba, quien la agredió físicamente para sustraerle su cartera, mientras el acusado habría prestado labores de cobertura durante la comisión del ilícito. Sin embargo, al examinar en detalle los antecedentes probatorios ofrecidos para sustentar esa imputación, se advirtió una insuficiencia probatoria y una carencia de vinculación entre el acusado y los hechos descritos.

En primer lugar, la víctima —única testigo presencial del hecho— no identificó al acusado ni en juicio ni en instancia anterior alguna. No quiso concurrir a la diligencia de reconocimiento fotográfico, aduciendo que no se encontraba en condiciones y tampoco pudo individualizar al supuesto acompañante varón que habría descendido del

vehículo. Su relato se centró exclusivamente en la mujer que la atacó, a quien sí describió con claridad y atribuyó el uso de violencia física. De este modo, solo hizo mención del hombre de una forma secundaria y ambigua, reducida a la expresión verbal 'déjala, déjala', sin que se haya descrito acción física, gestual ni elemento alguno que permita colegir su participación funcional en la ejecución del robo o en el desapoderamiento violento de las especies, que permitiera imputarle participación alguna en el delito.

Segundo, no existieron testigos independientes ni funcionarios policiales que hayan podido observar los hechos en forma directa o aportar elementos objetivos que permitieran establecer la presencia o intervención del acusado en el sitio del suceso durante ese hecho específico. Tampoco se acompañaron registros audiovisuales ni pruebas periciales que corroboraran su ubicación o desplazamiento en ese momento, ni siquiera en el vehículo tantas veces sindicado.

Tercero, las diligencias investigativas realizadas por las funcionarias de la Policía de Investigaciones, en especial las comisarias Rebolledo, Tapia y Cortés, si bien permitieron establecer una dinámica común en los delitos imputados y una vinculación entre el acusado, un vehículo Hyundai gris con daño visible y otros hechos, no ofrecieron elementos específicos y concluyentes que vincularan al acusado con este hecho en particular. Ninguna de las funcionarias informó que la víctima Sara Zamora hubiera reconocido al acusado o entregado una descripción que permitiera deducir su identidad o rol concreto en el hecho.

Cuarto, desde el punto de vista de la participación criminal, para que se configure coautoría o complicidad es necesario acreditar la existencia de un acuerdo previo, cooperación relevante o intervención material en el hecho, según lo establece el artículo 15 del Código Penal. En este caso, la supuesta conducta del acusado se limitó —según la declaración de la propia víctima— a una expresión verbal sin implicancia funcional. No se acreditó planificación, presencia previa, distribución de roles ni coordinación con la ejecutora material. Así, no es posible imputarle una intervención que tenga eficacia causal en la producción del resultado delictivo, ni siquiera bajo el umbral de una complicidad o encubrimiento.

Finalmente, el estándar de la duda razonable exige que, ante la ausencia de prueba directa, reconocimiento, corroboración material o inferencias inequívocas, toda incertidumbre opera a favor del acusado. No se puede construir una sentencia condenatoria sobre la base de conjeturas, inferencias débiles o la sola asociación con patrones de comportamiento previos o posteriores. La existencia de una posible coincidencia de *modus operandi* no sufre, bajo ningún supuesto, la ausencia de prueba contundente de su participación en el hecho.

En consecuencia, no habiéndose rendido prueba suficiente para acreditar de manera directa, inequívoca y razonable la intervención penalmente relevante del acusado en el hecho N°2, este tribunal decidió absolverlo respecto de dicho cargo, en respeto al principio de legalidad, la presunción de inocencia y la garantía de un debido proceso.

**Vigésimo séptimo:** *Fundamentos de la absolución:* Que de este modo surgen en el Tribunal dudas más que razonables, respecto del hecho descrito como número dos en la acusación que pueda ser acreditados con la prueba incorporada en juicio, por lo que consecuentemente, resulta imposible establecer una posible autoría del encartado en los mismos.

En tal sentido cabe recordar que para condenar no basta con que los hechos pudiesen haber acaecido o que el acusado hubiese podido cometerlos, toda vez que el estándar de convicción de la duda razonable conlleva la exigencia de que el persecutor penal demuestre tanto los hechos como la participación del enjuiciado en ellos y que el Tribunal este



convencido de ambos aspectos, como lo exige el principio in dubio pro reo como manifestación de la presunción de inocencia.

A mayor abundamiento y, si bien quien acusa es libre de elegir y escoger los medios de prueba con los que decide afrontar el juicio, el ejercicio de dicha libertad, así entendido, encontraría siempre un freno o límite en la convicción que, a partir de un cierto estándar probatorio y, únicamente en base a la prueba del juicio, se ha de generar en el juez. En efecto, y como “la verdad condenatoria no se asume, debe ser construida, a través de la actividad dialógica de las partes evaluada y decidida por quienes entran en contacto con el caso” (“Ingeniería de la verdad. Procedimiento penal comparado”, Alberto Bovino), corresponderá entonces necesariamente absolver, cuando a la verdad condenatoria del acusador se oponga la duda más allá de lo razonable del sentenciador.

Lo anterior por cuanto la libertad de apreciación de la prueba que reconoce el legislador al juez no permite, supone ni conlleva en modo alguno soslayar la carga procesal -y su consiguiente estándar- que en materia de prueba recae sólo sobre el Ministerio Público a la hora de resolver si se acoge o no su acusación, carga y estándar que en la especie no fueron satisfechos a juicio de estos sentenciadores, por lo que no queda sino que absolver al acusado de la imputación de ese hecho que en su contra se realiza, por cuanto no basta con que sea posible o probable que el delito pueda haberse cometido, ya que el estándar de la duda razonable exige que tal conclusión sea una certeza moral y por tanto relativa y no una convicción absoluta o matemática propia de un sistema inquisitivo en que se pretenda construir la verdad histórica. En tal sentido, López Masle, citando jurisprudencia norteamericana (Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, página 156), refiere respecto a la certeza de culpabilidad del imputado una vez que se ha rendido la prueba que: “si a la pregunta de si el imputado es con certeza culpable, la respuesta es sí, el imputado debe ser condenado, si la respuesta es probablemente sí, posiblemente sí, posiblemente no, o cualquier otra distinta de un inequívoco sí, el imputado debe ser absuelto”, por lo que se acogió la solicitud de absolución planteada por la Defensa del acusado, pero solo respecto a dicho acápite.

**Vigésimo octavo:** *Descarte del resto de las alegaciones de la Defensa.* En sus alegaciones la Defensa intentó instalar una serie de cuestionamientos que, sin embargo, no lograron debilitar en forma alguna la solidez y contundencia de la prueba presentada por el Ministerio Público. Respecto de la supuesta falta de participación directa del acusado en los hechos, la defensa alegó que su defendido sólo cumplía funciones secundarias, específicamente “de seguridad” en el vehículo, sin ejercer actos de violencia ni intervención en la sustracción de las especies de propiedad de las víctimas, sin embargo, esta tesis fue ostensiblemente desmentida por las propias víctimas, quienes reconocieron al acusado como uno de los sujetos que descendía del vehículo, portaba armas blancas, y ejecutaba actos de violencia e intimidación en contra de ellas, lo que se vio reforzado por todos los indicios que dieron lugar a una investigación en conjunto atendido el modus operandi que se repetía en relación a las mujeres que solas transitaban por la vía pública y eran abordadas, ya que sea por el acusado y una mujer o él, quienes a través de la intimidación o violencia lograron apropiarse de sus bolsos y carteras en un tiempo acotado y dentro de una misma zona, lo que motivó la agrupación de las investigaciones.

En cuanto al argumento de que el acusado no conocía las intenciones delictivas de su acompañante o que no tenía control sobre los actos que ella ejecutaba, la prueba incorporada permitió establecer con absoluta claridad que existía una coordinación funcional y operativa entre ambos partícipes, en relación de medio a fin entre la violencia o intimidación que provocaban en sus víctimas con la finalidad de hacer suyo el botín. En tal sentido, las versiones de las víctimas dieron cuenta de cómo ambos actuaban en conjunto, con distribución de tareas, y llegaban e huían en el

mismo vehículo conducido por el acusado. Por lo que la reiteración del mismo patrón en los sucesos sirvió de base para establecer la autoría del imputado en los hechos por los cuales se emitió veredicto condenatorio.

La Defensa, también planteó que algunos de los reconocimientos fotográficos serían poco confiables o inducidos, especialmente en el caso de Fernanda Millavil. No obstante, dicho reconocimiento fue confirmado en juicio por la propia víctima, quien explicó con claridad cómo y cuándo identificó al acusado. No se acreditó irregularidad alguna en el procedimiento, ni existió contradicción relevante en la identificación. De este modo, los asertos esgrimidos por la defensa técnica no pasaron de ser meros supuestos o elucubraciones y, sobre todo apreciaciones parciales y poco objetivas de los testimonios de las víctimas. Ya que en dicho caso la afectada explicó de manera acabada cómo su amiga María González había concluido que se trataba del acusado y, ello resultó acorde a lo señalado por los vecinos del sector a los policías, en orden a quién era el asaltante y en qué vehículo transitaba en compañía de los demás hechores.

A su vez, la Defensa insinuó que las víctimas podrían haberse confundido respecto de la identidad del imputado debido a la tensión emocional del momento. Este argumento, sin sustento empírico, queda desvirtuado no solo por los múltiples reconocimientos unívocos del acusado, sino también por la coincidencia en la descripción física, el patrón de comportamiento delictivo, el vehículo empleado y la dinámica repetida en todos los hechos. La coherencia entre los testimonios, la prueba documental permiten en ese sentido descartar la argumentación.

También enfatizó que los testimonios de los vecinos no eran fiables, porque no declararon de manera formal en la investigación, sin embargo no solo dieron cuenta de ello los funcionarios, sino que también la propias víctimas como fue el caso de Fernanda Millavil, quien sostuvo que se decidió a denunciar el hecho cuando se enteró del nombre de la persona q la había asaltado, respecto de quien le dijeron que había participado en varios asaltos, entonces “no quiso quedarse callada”. A continuación contó cómo empezó a verlo varias veces por el sector, lo que le ayudó a reconocerlo.

En lo que dice relación con la información aportada por la víctima Daniela Martínez y el vehículo utilizado por el acusado, si bien es cierto indicó que se trataba de un vehículo de color gris y chocado proporcionando como marca del automóvil un Chevrolet modelo Spark, lo cierto es que coincidió tanto en el color como lo pequeño del vehículo, ya que tanto el Hyundai i10 como el Chevrolet Spark se caracterizan por sus pequeñas dimensiones, por lo que confundir un modelo y otro no resulta extraño ni raro, menos cuando se trata de personas poco conocedoras y, que además aportan datos coincidentes en cuanto a color, tamaño y choque o abolladura, en relación a las características aportadas por las demás víctimas, lo que permite descartar dicha mención como una contradicción relevante en la información proporcionada.

En conclusión, ninguno de los argumentos anteriores logró generar una duda más que razonable y de esta forma cuestionar la suficiencia, completitud y armonía de la prueba rendida en juicio. Por el contrario, todos ellos han sido ampliamente superados y descartados mediante el análisis conjunto y detallado de los medios probatorios. La versión del acusado fue refutada por la contundencia de los testimonios, la lógica de los hechos, la evidencia documental y la reconstrucción investigativa. Por tanto, no subsiste duda razonable que permita estimar otra versión como plausible distinta a la propuesta por el persecutor en los hechos signados con los numerales 1, 3, 4 y 5.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 11 N°9, 15 N°1, 28, 50, 432, 436, 439 y 450 del Código Penal; 1, 4, 45, 46, 47, 48, 166, 295, 296, 297, 298, 309, 323, 325, 326, 328, 329, 332, 333, 338, 339, 340, 341, 343, 346, 348, 351, 468 y 469 del Código Procesal Penal; **SE DECLARA:**

I.- Que se **absuelve** a **Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza**, antes individualizado del cargo fiscal de ser **autor del delito consumado de robo con intimidación**, previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 436 del Código Penal en relación con los artículos 432 y 439 del mismo código, supuestamente cometido el día 13 de diciembre de 2016 en la comuna de Recoleta, en perjuicio de la víctima Sara Elvira Zamora Rivera.

II.- Que se **condena** a **Jeffrey Ignacio Llanillos Plaza**, antes individualizado, como **autor de cuatro delitos consumados de robo con violencia e intimidación**, previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 436 del Código Penal, en relación con los artículos 432 y 439 del mismo código, cometido el día 4 de diciembre de 2016 en perjuicio de la afectada **Carolina Andrea Guzmán San Martín** y, el día 13 de diciembre del mismo año en perjuicio de las afectadas **Valentina Antonia Guerrero Zúñiga** , **Daniela Valeska Martínez Acuña** y **Fernanda Del Carmen Alonso Millavil**, todos cometidos en la comuna de Recoleta de esta ciudad, **a la pena única de doce (12) años** de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

III.- Que atendida la extensión de la pena impuesta al sentenciado **Llanillos Plaza**, no procede concederle ninguna pena sustitutiva al cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, debiendo entonces dar cumplimiento efectivo de la misma, existiendo un abono a su favor desde el día 24 de mayo de 2023 al 29 de mayo de 2025, tiempo que ha permanecido, interrumpidamente, en prisión preventiva en la presente causa, lo que suma un total de **737 días**, según certificación del señor Jefe de Unidad de Administración de Causas de este tribunal.

IV.- Que no se condena a los intervinientes al pago de las costas de la causa.

V.- Que se ordena determinar la huella genética del sentenciado Llanillos Plaza con el fin de incluirla en el Sistema Nacional de Registro de Condenados, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

VI.- Asimismo, en relación al mismo condenado dese cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de la Ley N°20.568, oficiándose al Servicio Electoral en su oportunidad.

Devuélvase a los intervinientes la prueba incorporada, según sea el caso, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Oficiese, en su oportunidad, a los organismos que corresponda para comunicar lo resuelto y remítanse los antecedentes necesarios al señor Juez de Garantía de esta causa.

**REGÍSTRESE.**

**RUC N°1601189897-5**

**RIT N°497-2024**

Redactada la sentencia por la magistrada Alejandra Pía Rodríguez Oro.

**CODIGO DELITO : (802)**

Pronunciada por la sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrado por los jueces doña Pamela Quiroga Lorca, quien presidió la audiencia, doña Maite Ramírez Castillo y doña Alejandra Pía Rodríguez Oro.